

## LAS CORTES DE CADIZ Y AMERICA

POR LORENZO POLAINO ORTEGA

### I.—*Propósito*

Es mi propósito, en este lugar, hacer un estudio de la labor realizada por las llamadas Cortes de Cádiz, procurando analizar los pensamientos jurídicos, ideas políticas y demás motivos que influyeran en cada caso sobre aquellos legisladores, y ocuparme especialmente de los insignes hijos de Hispanoamérica, por primera vez Diputados en unas Cortes de la Metrópoli, que con sus intervenciones aportaron cierta orientación a la labor de aquellos legisladores, procurando en fin indagar las ideas que fueron predominantes y el fruto de sus actividades.

Teniendo en cuenta que las Cortes doceañistas son un importante pasaje de nuestra Historia, y que no se deben estudiar los hechos históricos para su más exacto conocimiento aisladamente, sino en relación con los antecedentes que influyen en ellos y con los efectos que producen, sería incompleto este estudio si lo comenzara ocupándome desde un principio de aquellas Cortes de 1812; por eso, antes de entrar de lleno en el tema, he de hacer unas consideraciones generales referentes a la situación de Europa en el siglo XVIII y de España e Iberoamérica en los tiempos anteriores al siglo XIX.

No es preciso hacer resaltar las dificultades de mi empresa; mucho y difícil trabajo, de una parte, y poco tiempo y menos capacidad, de otra, facilitan su apreciación; pero si

—como me temo— este trabajo no llega a donde debía, me interesa hacer constar que no es por falta de voluntad.

Antes de pasar más adelante, quiero advertir que, por el asunto a tratar, a veces he de hablar de diferentes ideas políticas, y que, aunque siempre respetuoso para con el pensamiento de los demás, en esta ocasión quiero hacer mía una frase de mi maestro Fernando de los Ríos, que dice así: «La Ciencia es cosa de la conciencia —nos decía el maestro español Giner de los Ríos—; y porque así pensamos, no creemos que debe tergiversarse la naturaleza del problema; en su virtud, si la política es susceptible de ser Ciencia, es un mandato moral para el científico no tratar la Ciencia en sí políticamente».

## II.—*Ideas generales sobre la situación de Europa en el siglo XVIII*

Un gran Imperio, Rusia, salía hacía poco del aislamiento de su existencia oriental, y se incorporaba con gran pujanza a la vida europea durante el reinado de Pedro I el Grande (1672-1725), llegando a su mayor apogeo con Catalina II (1729-1796), una gran Emperatriz.

Ocupaba el centro de Europa otro viejo Imperio, Austria, cuya antigua preponderancia sobre los demás pueblos centroeuropeos se veía amenazada por el desarrollo de Prusia, nueva potencia, que aumentaba el poder bajo la militar familia de los Hohenzollern.

Contemporáneos de Catalina II de Rusia eran María Teresa de Habsburgo y Federico II el Unico, en Austria y Prusia, respectivamente. Todos tres monarcas de gran genio, y a veces enconados enemigos, estuvieron, sin embargo, de acuerdo, para llevar a cabo el monstruoso reparto de Polonia; y los tres, aunque influidos por las ideas de los filósofos franceses con quienes hasta sostuvieron correspondencia, y aunque orientaron la política interna de sus Estados en la fórmula del «despotismo ilustrado»: «todo para el pueblo,

pero sin el pueblo», fueron, en realidad, verdaderos monarcas absolutos.

Inglaterra, potencia cuya preponderancia, sobre todo en los mares, iba acentuándose desde el siglo anterior, era un tipo de régimen diferente. Desde los primeros tiempos de la dinastía de Hannover, desde el reinado de Jorge I, se había establecido el uso de que «el rey reina, pero no gobierna»: «sin que se añadiera ningún texto legislativo a la Magna Carta de 1215 ni a la Declaración de Derechos de 1688, y simplemente en virtud de tradiciones y por causa de circunstancias». Inglaterra estaba gobernada por medio de representantes de la nación y en la forma de un régimen parlamentario.

Por otro lado, Francia es, sin duda, el país que, en su política interior, llama más la atención durante el siglo XVIII. La dinastía de los Borbones, de un criterio tan absolutista que magníficamente se refleja en la frase del «Rey Sol»: «El Estado soy yo», había sido destronada en la persona de Luis XVI, cuya cabeza cortó la guillotina el 21 de enero de 1793. El pueblo francés, influenciado por las nuevas ideas que pregonaran Rousseau, Montesquieu, Voltaire..., hace su propia revolución y, aboliendo el régimen monárquico, instaura el republicano el día 24 de septiembre de 1795.

Guerras entre los partidarios políticos que aspiraban al poder, odios personales de sus jefes más caracterizados, Danton, Robespierre..., fueron la causa de lo que se llamó «época del terror», página sangrienta de la Historia de Francia, que también había de registrar la ejecución de los caudillos republicanos: «El disgusto causado por la situación anterior, y la angustia provocada por el peligro exterior, contribuyeron a la caída del régimen», que de hecho fue el golpe de Estado de Bonaparte del 9 de noviembre de 1799 (18 brumario); y de derecho, el 18 de mayo de 1804, en que el Senado decretó que «el gobierno de la República era confiado al emperador Napoleón».

Así pues, tres Monarquías absolutas, una de gobierno parlamentario, y una República de vida accidentada, naciente de las ruinas de otra vieja Monarquía por influjo de nuevas

ideas, que se propagan atravesando fronteras y mares, es la situación, a grandes rasgos trazada, de la Europa del siglo XVIII.

III.—*Ideas generales sobre la situación de España y sus Américas en los tiempos anteriores al siglo XIX*

Desde tiempos de los Reyes Católicos, en que se llevó a cabo la unidad territorial de nuestra patria, España era una verdadera Monarquía absoluta. Fernando de Aragón (1442-1516) e Isabel de Castilla (1451-1505) no sólo manifestaron sus ideas de unificación al dar fin a la epopeya de la reconquista, sino también al conquistar y centralizar en sus manos el poder arrancado a los nobles, que desde entonces pierden su carácter feudal para convertirse en cortesanos. Estos monarcas, en cuyas reformas legislativas, militares, administrativas, se nota el espíritu centralizador de su siglo, por cierto fueron creadores del Tribunal de la Inquisición, que más tarde había de degenerar en un instrumento político.

Los primeros monarcas de la casa de Austria son prototipos de soberanos absolutos. Carlos V (1500-1558), príncipe activo y guerrero, ganó una gran batalla para el absolutismo en la jornada de Villalar, que unos tratadistas presentan como la insurrección del pueblo contra el Rey, y otros, al parecer más razonadamente, como la última resistencia de la nobleza para mantener sus privilegios. Felipe II (1527-1598), rey severo y religioso, fue el más absoluto de todos los monarcas españoles; en su reinado, en muchas ocasiones, se aplicó «la razón de Estado, que tantas veces encubre el estado de falta de razón», y en él, ruedan por el suelo, con la cabeza de D. Juan de Lanuza, las libertades de Aragón. Sus sucesores hasta el primer Borbón, aunque conservan el poder absoluto, no lo ejercieron por sí, sino que, ineptos para el gobierno, lo delegaron en favoritos o validos que, sin más mérito para ello que su prodigalidad en adulaciones cortesanas, empujaron a España, cada vez más, por la decadencia que ya se había iniciado en los últimos tiempos del monarca



del Escorial. Estos favoritos, señores omnipotentes durante su valimiento, sólo se preocupaban de satisfacer los caprichos del monarca, a costa de los mayores gastos, cuando no de procurarse beneficios personales. Tan bajas miras explican lo desastroso de sus gobiernos.

Felipe V (1683-1746) es el primer monarca español de la dinastía de los Borbones; este príncipe, nacido, educado y criado en la Corte de Luis XIV, difícilmente podía comprender ni transigir con lo que no fuera un absolutismo riguroso, y a sus manos muere la libertad de la Generalidad de Cataluña, último baluarte de los fueros de los antiguos estados medievales de la península. De sus sucesores, es Carlos III, sin duda, el más glorioso: aunque conserva el poder absoluto, se rodea de buenos consejeros, y en su reinado España tiene una etapa de resurgimiento.

Sucesor de Carlos III fue Carlos IV (1748-1819), rey casado con María Luisa de Parma, que da fin al siglo XVIII y comienza el XIX. Como ha resaltado Pío Zabala, «por singulares azares de la diosa casualidad, al mismo tiempo que el real matrimonio español gobernaba nuestra patria, la vecina Francia sufría, bajo el reinado de Luis XVI y de María Antonieta, aquellas primeras inquietudes que fueron prólogo de los excesos jacobinos. ¡Qué concomitancia entre las dos rejas parejas! Luis XVI y Carlos IV estaban cortados por el mismo patrón; María Luisa y María Antonieta eran como dos gotas de agua. De pretender hallar alguna diferencia en la naturaleza moral de estas personas, tan sólo se encontrará así: Luis XVI fue un hombre bueno, Carlos IV un buen hombre; María Antonieta fue la encarnación del orgullo, María Luisa el orgullo de la encarnación». En este reinado, que tanto se parecía al último francés anterior a la primera república, entre una corte falsa e hipócrita, descuella D. Manuel de Godoy, «lindo mocito» que, de un oscuro puesto, ascendía al de favorito, gobernante absoluto de hecho, por obra y gracia de causas que no dejan muy limpia la honra de la misma reina.

A la vez que este poder de la Corona, que imprecisamente hemos calificado de absoluto, desde tiempos de los Austrias,

principalmente, existe otro que con él vive, se relaciona y se compenetra; es el del clero. Grande había sido la influencia clerical desde tiempos remotos en el gobierno de nuestra patria, pero a partir del siglo XVI, según resalta Fernando de los Ríos, esta influencia se hace decisiva. La previa censura eclesiástica para las publicaciones, la prohibición de importar libros que podían traer gérmenes del reformismo del que se había declarado principal enemigo la Majestad Católica, los autos de fe para combatir los focos protestantes que surgieran en España, el gran aumento de órdenes religiosas, todas ellas ricas y libres de impuestos, el desarrollo y la influencia del clero, y sobre todo, la Inquisición, con tribunales temibles y, a veces, con preponderancia sobre los ordinarios, nos dice hasta qué punto llega el poder del clero, que, juntándose con el de la corona, acaparan la soberanía nacional.

Mientras tanto, en América se había hecho una labor colonizadora principalmente por medio de los Virreyes. En esa colonización, la Corona, no sólo miró a las colonias con espíritu de justicia, sino de altruismo; no obstante, su administración a veces no fue perfecta, pues respondiendo casi siempre a criterios personales de los virreyes, y siendo malas las comunicaciones, con frecuencia se tradujo en malos usos de sus facultades.

El disgusto producido por esos casos de mala administración, las ideas de los enciclopedistas franceses llevadas allí por jóvenes americanos que habían venido a hacer sus estudios a Europa, el ejemplo dado por los Estados Unidos de Norteamérica y, sobre todo, el que los pueblos de las colonias empezaran a sentirse mayores de edad, fueron causa de que en ellas se despertara un espíritu de autonomía, de aspiración a la igualdad con los demás territorios de la metrópolis, que, de no comprenderlo y encauzarlo bien, fácilmente se transformaría en espíritu de independencia.

Así pues, una monarquía que gobernaba, ya por sí, ya por medio de favoritos incapaces para ello, y un clero rico, poderoso e influyente, se comparten la soberanía de España y sus colonias americanas durante los tiempos anteriores al siglo XIX.

#### IV.—*De cómo llegan a constituirse las Cortes de Cádiz*

Digustos habidos entre Carlos IV y su hijo Fernando acrearon la caída de Godoy y la abdicación del primero en el segundo; aspirando, no obstante, ambos al poder, buscaron los dos el apoyo de sus aspiraciones en la ayuda de Napoleón, el que a la sazón, so pretexto de pasar hacia Portugal, tenía en España un fuerte ejército. Bonaparte hace como que accede a las solicitudes del padre y del hijo, promete a ambos, los lleva a Bayona, y allí deja ver claramente su intención.

Es Napoleón, tal vez, el genio más grande que conoce la Historia: buen militar, nos llama más la atención en otros conceptos. No fue un gobernante que conociera los procedimientos de la política a fondo, pero supo rodearse de buenos colaboradores y, sobre todo, tuvo miras muy elevadas. El espíritu de unificación se da en él potentemente, y así, su Código, su proyecto de una Federación Europea en que sus familiares se coronaran y reinaran en las demás naciones con cierto vasallaje respecto al Emperador de los franceses, hace que, con razón, por alguien haya sido considerado como el primer paneuropeísta, antecesor de Brian, diferenciándose de éste, principalmente, en que empleara las armas, en lugar de la diplomacia, como medios para la consecución de su fin, ya que eran más acordes con sus tiempos, lo cual, a la postre, había de ser causa de su fracaso, ya que, como ha afirmado el Profesor Altamira, tales resultados sólo pueden triunfar si se consiguen por el camino del convencimiento y no de la fuerza.

Y Napoleón, en Bayona, laborando por su idea, con poco trabajo, logra para ella la renuncia de los derechos al trono español de la familia que lo ocupaba.

Pero el Emperador francés no había contado con la voluntad del pueblo español, y ésta fue su gran equivocación. En efecto, según Pedro Aguado, «el alzamiento contra la dominación francesa fue un movimiento nacional, una explosión de patriotismo tan magnífica y espontánea como rara vez se ha visto en el mundo». A partir de la jornada de Madrid del 2 de mayo, la guerra al invasor se declara en todas las ciu-

dades, en todas las villas, en todas las aldeas, en España entera; esta resistencia nacional era fomentada por el clero, que «predicó una verdadera cruzada contra Napoleón, que tenía en aquel momento prisionero al Papa. ¿Qué son los franceses? —se leía en el catecismo que se enseñaba a los niños—. Antiguos cristianos hoy heréticos. ¿Es pecado matar a un francés? No, se gana el cielo matando a uno de esos perros heréticos», según testimonio de A. Malet.

Para luchar contra el invasor, en cada capital de provincia se organiza una Junta de Defensa, a quien se encomienda la dirección de la campaña, pero este esfuerzo del pueblo por su independencia era conveniente que no se manifestara en focos aislados, sino de modo metódico y ordenado, y así lo comprendieron las Juntas Provinciales de Defensa, y en Aranjuez, como resalta Pío Zabala, «celebróse el 25 de septiembre la solemne instauración de la Junta Central bajo la presidencia de Floridablanca», quien, adoptando para sí el tratamiento de Majestad y el de Alteza para el presidente, se constituía en poder supremo y director de la campaña contra el invasor.

Propuso Jovellanos a la Central la convocatoria de Cortes y la creación de una regencia para constituir un gobierno legal, que en tan críticos momentos se encargara de España, mas por diferentes causas no logró el ilustre autor su propósito. Había pasado Napoleón el Bidasoa, en esto, y hubo de trasladarse la central a Sevilla para su seguridad, donde murió el anciano Conde de Floridablanca, ocupando su puesto el Marqués de Astorga, menos reaccionario que el antiguo presidente; y allí Calvo de Rozas, elemento izquierdista, volvió a abogar por la convocatoria de Cortes.

Como la convocatoria gozó de opiniones a favro, según testimonio de Pío Zabala, «acordóse el 22 de mayo (1809) el restablecimiento de la representación legal y conocida de la Monarquía en sus antiguas Cortes, convocándose en todo el año próximo o antes si las circunstancias lo permitían», y para ello la Junta nombró una Comisión, que se encargaría de este asunto; de esta Comisión fue secretario Quintana, profundamente influido por las nuevas ideas francesas.

A partir de este momento, tres opiniones referentes a la

forma de convocar Cortes se disputan la influencia sobre aquella Comisión; era la una la sustentada por el elemento más conservador, partidario de que las Cortes habían de limitar su actividad a la defensa del territorio nacional, y que ellas se debían convocar según el procedimiento tradicional; era la otra la sustentada por Jovellanos, según el cual se debía de reconstituir la antigua constitución política de España, y convocarse las Cortes en sus tres brazos, estableciéndolas a la forma inglesa de Cámara alta y Cámara baja; y era la tercera la de Calvo de Rozas y Quintana, partidarios, no sólo de defender a España contra el invasor, sino de declarar la soberanía nacional, imponiéndole al Rey una Constitución. Estos últimos, influidos por las ideas de Francia, querían que la convocatoria no fuera a la manera tradicional, sino a la nación entera, y que la reunión se hiciera en una sola Cámara.

Mientras tanto, el avance francés había obligado a disolverse a la Central, pero ésta, antes de su disolución, había nombrado una Regencia, compuesta por D. Pedro Quevedo Quintano, Obispo de Orense, D. Francisco Saavedra, D. Francisco Javier Castaño, D. Antonio de Escaño y D. Esteban Fernández de León, y a esta Regencia le había encomendado como misión especial la convocatoria de Cortes.

Es el Decreto más importante con anterioridad a la convocatoria el dado por la Regencia, obedeciendo a los momentos de verdadera angustia porque atravesaba España, y al que contestaron los territorios americanos con actos de verdadero heroísmo; este decreto establecía que «los dominios de América formaban parte integrante y esencial de la Monarquía española, y, como tales, les corresponden los mismos derechos y obligaciones que a la metrópoli».

Volviendo otra vez a ocuparnos de la Comisión para la convocatoria de Cortes, hemos de decir que, de las tres influencias que sobre ella pesaban, una de ellas había quedado descartada, la de los conservadores, de suerte que sólo las influencias inglesa y francesa se disputaban la supremacía.

Jovellanos, a la sazón, como subraya Rafael M. de Labra, sostenía una frecuente correspondencia con Lord Wassall

Holland y otros conspicuos ingleses, y en esta correspondencia advertimos la influencia de la Gran Bretaña, y, a través de cada una de aquellas cartas llegadas de la Isla Britana, pueden irse observando, paso a paso, los diferentes escritos y proyectos que Jovellanos elevaba a la Comisión.

Por otro lado, Quintana influía constantemente, dentro de la Comisión, a favor de los procedimientos franceses, y, sabiendo que la Regencia era de un criterio retrógrado, abusó de su cargo de Secretario de la Comisión, y guardó las proposiciones jovellanistas, que seguramente hubieran triunfado; a la hora de entregar a la Regencia el fruto de la labor de aquella Comisión, los escritos de Jovellanos no aparecían por ningún lado, y aunque, cuando se hicieron las reclamaciones consiguiente, él dijo que los había dejado sobre la mesa con otros papeles, y él mismo los buscó y los encontró entre ellos, el caso es que, como indica M. Calvo Marco, «los acontecimientos se precipitaron de tal forma que ya fue tarde cuando se pretendió llevar a cabo el primitivo acuerdo de la Central de convocar los tres brazos», y sólo el llamamiento al pueblo fue el que se pudo cursar.

Con esto triunfa la influencia francesa sobre la inglesa, y este triunfo es mucho más definitivo, si se tiene en cuenta que ni la convocatoria al pueblo se hizo al modo tradicional, sino que se ordena que «las Juntas provinciales nombren un Procurador o Diputado de Cortes por cada cincuenta mil almas que tenga aquella provincia con arreglo al último censo español publicado en el año 1797», y, sobre todo, si consideramos el acuerdo de aquellas Cortes que deliberaron en una sola Cámara.

Por fin, la Regencia convocó Cortes. Veamos qué antecedentes tienen éstas, y sus características diferenciales de ellos. Hay quien quiere relacionar las Cortes de Cádiz con las antiguas Cortes castellanas que se convocan en sus tres brazos: nobleza, clero y ciudades, los que habían de hablar por primera vez representados por el Sr. de Lara, por el Arzobispo de Toledo y por la ciudad de Burgos; pero dice Rafael M. de Lara que «sería preciso conocer muy poco la Historia del Derecho español y la Economía, razones de nuestra vieja ins-

titución política, para no advertir, desde el primer golpe de vista, las profundas novedades introducidas en el régimen electoral y la representación en cortes». En efecto, aquellas antiguas Cortes, que se convocaban cada dos años según unos, cada tres según otros, cada siete según los que parecen estar más en lo cierto, a partir de la guerra de las Comunidades, habían ido dejando de convocarse, hasta tal punto que sólo treinta y dos veces se reunieron en doscientos cincuenta y dos años, perdiendo importancia a partir de aquella fecha, hasta quedarse reducidas a meros instrumentos de la Corona.

Las nuevas Cortes tienen caracteres diferenciales respecto a las antiguas: En primer lugar, la convocatoria para los representantes de las ciudades hecha en la forma que hemos indicado; en segundo, la asistencia de los Diputados de los territorios americanos, equiparados por la Regencia a los peninsulares, que era el primer caso en que dejaba el Gobierno de ser función exclusiva de los hombres de la metrópoli; en tercero, el establecimiento en Cámara única; y en cuarto, el acuerdo, tomado en las Cortes mismas, de reunirse anualmente con independencia de la voluntad real, hace que las tres notas características de ellas fueran las siguientes: primera, constitución en Cámara única y representación nacional; segunda, reunión constante de la representación nacional; tercera, la asistencia de los Diputados americanos a las Cortes de la Nación española para resolver y discutirlo todo en concurso con los Diputados peninsulares, y con los mismos derechos y prerrogativas que éstos disfrutaban.

Por fin, y para terminar esta rápida idea sobre la constitución interna de las Cortes de Cádiz, debe recordarse, con Pío Zabala, que a las nueve y media de la mañana del día 25 de septiembre de 1810 salieron, de Palacio de la Regencia de la ciudad de San Fernando, los ciento cinco Diputados representantes de las provincias españolas y territorios coloniales, encaminándose juntamente con los Regentes a la Iglesia de la Isla, donde juraron conservar la religión católica, la libertad de la nación española, los derechos de Fernando VII y sus sucesores legítimos, y el desempeño fiel y legal del encargo que habían recibido del país, guardando las leyes de Es-



pañá, sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiese el bien de la Nación.

De aquellos ciento cinco Diputados, que llevaban a las Cortes el carácter de mandatarios, no representantes de todo el país, cincuenta y siete eran propietarios, y cuarenta y ocho suplentes; y de los doscientos setenta, que constituyeran el número total, cuando fueran completas, doscientos ocho eran peninsulares, y sesenta y dos, americanos, y, como indica Salvador Menguijón, «nada menos que muy cerca de la tercera parte de la Cámara doceañista la constituían eclesiásticos, figurando entre ellos seis obispos, muchos canónigos, dos inquisidores y el comisario inquisitorial Burull, sobre 94 individuos».

#### V.—*El espíritu de las Cortes de Cádiz a través de su labor*

Habiéndonos preocupado ya de fijar las circunstancias en que tuvieron lugar las Cortes de Cádiz, tócanos ahora ocuparnos de ellas, procurando averiguar su espíritu y delimitándolo dentro de las condiciones ideológicas del tiempo y lugar en que existen. Para ello, vamos a estudiar separadamente cada uno de los acuerdos tomados, referentes a los más importantes asuntos sobre los que deliberaron, dejando para lo último, por su gran importancia, la Constitución de 1812, principal fruto de aquella Asamblea legislativa.

##### A) *Actitud referente a los invasores*

Empezaremos por ver qué actitud es la que adopta aquella magna Junta con relación a los ejércitos invasores. Antes aún de convocar Cortes, había diferencias de opiniones sobre cuál había de ser su misión. Advierte Pío Zabala que, para «los elementos derechistas adictos a la Monarquía tradicional, las Cortes habían de limitar su actuación a cuanto fuera defensa del territorio y restauración de los antiguos usos, fueros y costumbres españolas. Para Jovellanos, debían ser llamadas para restablecer la antigua Constitución política es-



pañola y para completarla en la medida que permitiera su esencia y aconsejaran las circunstancias. Por último, para Calvo de Rozas y demás extremistas, se imponía con toda urgencia hacer saber al país que no luchaban con el invasor de su patria para volver a poner su independencia, tan caramente rescatada, a la libre disposición de una Corte caprichosa, de un favorito ambicioso o de las cualidades personales de un soberano tan susceptible de alteración con la edad, sino para establecer un régimen constitucional como garantía y compensación de los derechos del ciudadano. La primera opinión era, en realidad, el lazo común a todos los constitucionalistas; de aquí que el combatir al invasor fuera, quizás, el objeto más deseado por aquella Asamblea.

Tras de un magnífico discurso de D. Diego Muñoz Torrero, presbítero, Diputado extremeño y Rector de la Universidad de Salamanca, el día 24 de septiembre, se da el primer Decreto fruto de aquellas Cortes. En él, tras de declarar los Diputados constituidos en Cortes Generales y Extraordinarias, en las que residía la Soberanía Nacional, y de jurar a Fernando VII como único y legítimo Rey, empezó el Congreso gaditano a mostrar su posición de hostilidad para los franceses.

Ya digimos antes que Carlos IV y Fernando VII, según E. del Valle Iberlucea, «cortesanos más bien que prisioneros de Napoleón», habían hecho en Bayona renuncia de sus derechos a la Corona. Pues bien, en el mismo primer Decreto mencionado, toman las Cortes el acuerdo de declarar nula su renuncia, y después, en el Decreto de 1 de enero de 1811, declararon inválido cualquier acto realizado por el Rey mientras no fuera libre; con ello, negaban la validez de los títulos que el Emperador alegaba para sus pretendidos derechos.

Demuestran de una manera más clara la actitud de los legisladores del doce, frente a los franceses, las recompensas que aquéllos otorgaron a los héroes más significados de la guerra de la independencia. Lord Wellington, por ejemplo, recibe, en señal de reconocimiento, por su campaña de la primavera de 1812, de honor por su victoria en los Arapiles, la Grandeza de España, el título de Duque de Ciudad-Rodrigo,

el Toisón de Oro, y más tarde la adjudicación para sí y sus sucesores del sitio real de la Vega de Granada, conocido por Soto de Roma; y, en ocasión de su visita a Cádiz, le hicieron un magnífico recibimiento y le agasajaron con un banquete.

Otro héroe, Antonio García, herido en varias batallas, recibió en recompensa una pensión de 6.000 reales y fue condecorado con la Cruz de San Fernando.

Lo dicho sería bastante para juzgar la actitud del Congreso frente a Napoleón, pero ratifica nuestro juicio el hecho de solemnizar la memoria del 2 de mayo, de acordar que se inscribiesen con letras de oro, en el salón de sesiones, los inmortales nombres de Daoiz y Velarde, y, sobre todo, aquella noble decisión de no abandonar la Isla, para elevar la moral del pueblo con el ejemplo, cuando el enemigo, triunfante y a pocos kilómetros, amenazaba la paz del Congreso y la vida de los Diputados.

#### B) *Libertad de imprenta*

Por iniciativa del Diputado suplente por el Principado de Asturias, Sr. Argüelles, comenzó el 5 de octubre de 1810 el debate sobre la libertad de imprenta, que duró tres días, y fue uno de los más interesantes. En él se dividieron los Diputados en dos bandos, uno llamado reformista o liberal, partidario de la libertad, y otro que se oponía a ella y que se llamó antirreformista o servil, nombre este último que ocasionó disgustos justificados, más aún si se tiene en cuenta que lo escribían sus enemigos separando las dos sílabas, de tal forma que se leía ser-vil.

El Sr. Argüelles, en un discurso pronunciado en la primera sesión del día 15, en defensa de la libertad de imprenta, acusaba a su falta como culpable de la situación de España, cuando decía así: «Cuántas luces se han derramado por la paz de Europa han nacido de esa libertad, y las naciones se han elevado en proporción que ella ha sido más perfecta. Las otras, oscurecidas por la ignorancia o encadenadas por el despotismo o la superstición, se han sumergido en la proporción

opuesta. España, siento decirlo, se halla entre estas últimas»... «Hubiera habido entre nosotros una arreglada libertad de imprenta, y la nación española no hubiera ignorado cuál era la situación política de Francia al celebrarse la infamante paz de Basilea. Nuestro gobierno, dirigido por el favorito más corrompido y estúpido, era incapaz de conocer los intereses de España»... «Extendamos la vista por todo el mundo, Inglaterra es la sola nación que hallaremos libre de estos horrores. ¿Y a quién lo debe? Mucho hizo en ella la energía de sus gobiernos; pero más hizo la libertad de imprenta».

Otro Diputado del mismo grupo liberal, Mejías Lequerica, ecuatoriano del que ya nos ocuparemos con la atención que merece, apoyaba la posición de Argüelles, y en la segunda sesión del mismo día, señala E. del Valle Iberlucea, «contó una especie de sueño alegórico que había tenido, en que se le presentó la superstición, que pugnaba contra la luz de la razón: sueño que veía verificado en las Cortes».

El Diputado suplente de Valladolid, Sr. Pérez de Castro, defendió la libertad de imprenta como medio para que el buen gobernante se conquistara la opinión pública con estas palabras: «De otro modo, ¿cómo podrá tener a su favor la opinión pública, que vale más que millones de ballonetas? Una nación grande y dichosa debe la conservación de su felicidad y grandeza a la opinión pública, nacida de su libertad y sostenida por la imprenta, que es el escudo contra todas las opresiones, y es igualmente amiga del pobre que del rico; que es la apelación que hace la verdad a la virtud del género humano», según testimonio de E. del Valle Iberlucea.

El Sr. Muñoz Torrero dedica uno de sus más bellos discursos, como resalta M. Calvo Marco, a la defensa de la libertad de imprenta, y lo hace bajo el punto de vista jurídico, a diferencia de los anteriores, desde la perspectiva social o política. De ese discurso son los párrafos siguientes: «La justicia es el principio vital de la sociedad civil, e hijo de la justicia es la libertad de imprenta. Voy a probar el derecho que el hombre tiene a gozar de la libertad: si lo hago, habré probado que ir contra este derecho es injusto; y toda injusticia es error». «Apliquemos este principio al momento pre-

sente, por ejemplo a Inglaterra. La gran causa de la independencia de aquella nación es la facultad que todo hombre tiene de criticar las acciones de los gobiernos, de examinar la conducta de los representantes del pueblo y de publicar su opinión acerca de ellos». «El derecho de traer a examen las acciones del gobierno es un derecho imprescriptible, que ninguna nación puede ceder, sin dejar de ser nación». «¿A quién ha encomendado la nación española su causa ahora? A nosotros: Nosotros somos sus representantes y, según nuestra Constitución primitiva, muy pocos pasos podemos dar sin la aprobación de nuestros constituyentes. Mas cuando el pueblo puso el poder en nuestras manos, ¿se privó por eso del derecho de examinar y criticar nuestras actuaciones?». «El pueblo no tiene más recurso que la imprenta. Si éste se le embaraza, ¿qué más le importa que le tiranice uno, que cinco, veinte o ciento?». «Fundando como lo he hecho la libertad del pueblo en la de la imprenta, debo decir que sólo por ella puede salvarse España». «En conclusión: yo creo que el pueblo tiene un sagrado e inviolable derecho a la libertad de imprenta, porque éste es el único medio por el cual puede lograr su debido influjo sobre la conducta de sus representantes».

En contra de lo mantenido por estos líderes del liberalismo, veamos la posición del partido antirreformista.

No fueron ni tan razonados ni tan brillantes los discursos pronunciados por los Diputados antirreformistas para combatir la Ley de imprenta; generalmente fueron clérigos los que se opusieron, aunque esto no quiere decir que todos los sacerdotes que asistieron a aquella Asamblea magna pensarán así, pues ya hemos hablado antes de la posición del Sr. Muñoz Torrero, y como él otros; así, indica M. Calvo Marco, «el señor cura de Algeciras se levantó y arguyó en favor de la libertad de imprenta, deduciendo su necesidad por una larga serie de silogismos, que empezó en el origen de la sociedad civil».

Fueron sus impugnadores más acérrimos Rodríguez de Bárcena, Creus, Morales Gallego, quien habló, en la sesión del dieciséis, en contra de la abolición de la previa censura, atri-

buyéndole varios males a la libertad de imprenta. Pero la mayoría de los atacantes eran eclesiásticos, y las Cortes exceptuaron lo religioso de la medida general, conviniendo «con el primer artículo la adición de la palabra política, por lo cual se excluían los asuntos religiosos o se quedaban en el mismo pie que antes», a juicio de M. Calvo Marco.

Después de este debate, el 10 de diciembre, se aprobó un Decreto sobre libertad de imprenta, que obedecía a las ideas fundamentales que expresan los artículos uno, cinco, siete, trece y quince, que dicen así: «Artículo uno: Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación bajo las restricciones y responsabilidades que se expresan en el presente decreto. Artículo V: Los jueces y tribunales respectivos, entenderán en la averiguación, calificación y castigo de los delitos que se cometieran por el abuso de la libertad de imprenta, arreglándose a lo dispuesto por las leyes y en este reglamento. Artículo VI: Todos los escritos sobre materia de religión quedan sujetos a la previa censura de los ordinarios eclesiásticos, según lo establecido en el Concilio de Trento. Artículo XIII: Para asegurar la libertad de imprenta y contener al mismo tiempo su abuso, las Cortes nombrarán una Junta Suprema de Censura, que habrá de residir cerca del Gobierno, compuesta de nueve individuos, y a propuesta de ellos, otras semejantes en las capitales de provincias, compuestas de cinco. Artículo XV: Será de su cargo examinar las obras que hayan denunciado al poder ejecutivo o justicia respectiva; y si la Junta Censora de la provincia juzgase, fundamentado su dictamen, que deben ser detenidas, lo harán así los jueces recogiendo los ejemplares vendidos».

Vemos, pues, que en esta cuestión el gran influjo del clero impidió que el carácter liberal de los legisladores pudiera atacar en lo más mínimo los viejos privilegios religiosos.

### C) *Esclavitud*

«Cupo el honor de iniciar la campaña abolicionista de los negros en España al celoso, activo y elocuente Diputado americano D. José Miguel Curidi y Alcocer, conocido generalmente, en aquella época, por el cura de Tacubaya», quien «en marzo de 1811 presentó a las Cortes en sesión secreta una proposición abolicionista», que comenzaba así: «Contrariando la esclavitud al Derecho natural, estando ya prescrita aun por las leyes civiles de las naciones cultas, pugnando con las máximas liberales de nuestro gobierno, siendo impolítica y desastrosa, de que tenemos funestos y recientes ejemplares, y no pasando de preocupación su decantada utilidad al servicio de las fincas de algún hacendado, debe abolirse enteramente». «Por esta proposición, había de quedar prohibida la compra y venta de esclavos, y había de ser proclamada la libertad de los que nacieran de éstos. Además establecía que los esclavos podían ganar salario, reduciéndose la esclavitud a tener amo, pero se consagraba la redención forzosa de aquél si abonaba el rescate al dueño, y se añadía que, cuando el esclavo se inutilizara por cualquier causa, dejase de percibir salario, pero teniendo el amo la obligación de mantenerle, mientras durare la imposibilidad temporal y perpetua», como debidamente ha resaltado Rafael M. de Labra.

Argüelles presentó otra proposición, en igual sentido. Estas proposiciones fueron apoyadas por Larrazábal, con nobles y elocuentes frases, en que miraba la cuestión bajo el punto de vista humanitario; decía que «no es menester más, para desterrar la esclavitud de una nación libre y generosa como la española, que atender a que ella es un efecto vergonzoso de las leyes dictadas contra la Humanidad». Pero, no obstante la nobleza de la campaña, y los grandes y gloriosos campeones que la sostuvieron, desgraciadamente no se llegó a un resultado positivo, desentendiéndose el legislador de esta materia, al confeccionar el código doceañista, en el que no aparece la palabra esclavitud, y..., lo que es más lastimoso aún, «hemos tenido que pasar por la vergüenza de que la prohibición del tráfico africano aparezca como imposición

del extranjero», ya que «no se resuelve hasta el 24 de septiembre de 1817, por el Tratado de España con Inglaterra, que prohíbe totalmente la trata, a partir del 30 de mayo de 1820, y otorga al gobierno español 400.000 libras esterlinas, como indemnización de la pérdida de los españoles ocupados en aquel tráfico, y de las generales que causaran aquella medida. Esta cantidad la recibió el rey Fernando VII, de la propia suerte que recibió más tarde los cinco millones de duros que la República de Norteamérica pagó por la anexión de Florida; datos interesantísimos, que conviene recordar para que se sepa a todas horas con qué rasgo de dignidad se despidió el extranjero del absolutismo español».

#### D) *Las mitas*

El nombre de D. Florencio del Castillo va íntimamente unido a la gran causa de la libertad de los indios, dice Rafael M. de Labra, y en efecto, él fue quien, en la sesión del 4 de abril de 1812, presentó una extensa proposición, apoyada por Ostolaza, Larrazábal, Toreno, Gallego y otros, para abolir las mitas de los indios y otras cargas que pesaban sobre los mismos.

El discurso que pronunció el Sr. Castillo, con ocasión de presentar la proposición, como subraya Rafael M. de Labra, fue una maravilla por el sentido humanista, social y de justicia que refleja, y que podemos apreciar a través de los párrafos que transcribo, entresacados de su texto. Decía así: «Hablo por la humanidad paciente; hablo por los afligidos indios, por los indígenas del Nuevo Mundo, que por tanto título son acreedores de nuestra consideración, y hablo para que se ponga fin y término a los males y vejaciones que sufren». «Constituido en la obligación de mirar por el bien y la felicidad de los pueblos, creí de mi deber proponer a V. M. la abolición de las mitas y de todas las servidumbres». «Asombra, Señor, la disminución de los indios desde que fueron descubiertas las Américas a nuestros días». «Muchas han sido seguramente las causas de tan asombrosa despoblación;



pero las mitas ha sido una de las que más ha influido en ella». «Las leyes indias claman contra estos abusos; ellas señalan el número de horas que han de emplear en el trabajo, la cantidad de peso que les pueden hacer cargar, la edad a que han de empezar a ser destinados a las mitas, el buen tratamiento que se le ha de dar, y toman otras muchas precauciones para evitar los vejámenes que se hacen a los indios. Pero estas leyes no sirven más que para escándalo de los buenos, que se lamentan de su inobservancia, y para dar un testimonio auténtico de que han existido semejantes abusos, de que existen actualmente y de que existirán mientras duren las causas que los producen». «Ya es tiempo de vindicar a los indios de la fea nota de perezosos con que han sido infamados por la codicia y la ingratitud. Apelo al testimonio de los diputados americanos y de los demás señores que han puesto el pie en aquel continente. Digan si, entre todos los habitantes de aquellos países, hay alguno que trabaje más tiempo, con más tesón y en ejercicios más penosos que los indios». «Quiero suponer por un momento que los indios, por razón del clima, o por alguna de aquellas causas que influyen en las costumbres de las Naciones y Pueblos, fuesen verdaderamente apáticos, indolentes o inclinados al ocio; aun bajo este supuesto, digo que las mitas no son el medio de corregir este vicio, y que, antes bien, lo promueven. La larga experiencia de tres siglos, en que las mitas sin interrupción han estado en boga, ofrece una prueba irrefutable de la verdad». «El deseo de las comodidades de vida, de los honores, de la estimación y consideración públicas, son los estímulos más poderosos que hacen al hombre emprender grandes cosas, arrastrar peligros y sufrir grandes fatigas». «En menos palabras; no hay honor, donde no hay estimación; y no hay estimación, donde hay vejación, servidumbre y esclavitud; no hay interés, donde no hay propiedad. Es, pues, claro que las mitas no son el medio de corregir la apatía de los indios. En caso de existir este vicio, yo diría que la abolición de las mitas es su remedio». «V. M. ha sancionado una Constitución en que se ha asegurado del modo más solemne los derechos de los españoles; de consiguiente, todas aquellas leyes que, siendo un efecto



del sistema antiguo, no pueden avenirse con nuestras leyes fundamentales, están derogadas directamente. Las leyes mitales están en este caso; pero es necesario que las Cortes declaren su derogación, pues de otra suerte la sed insaciable del oro pretendería sostenerlas».

El discurso, de que hemos entresacado estos párrafos, y la campaña que él empezó, terminaron con la Ley de 9 de noviembre de 1812, que abolía las mitas, repartimientos, faltrequeras y demás cargas personales que pesaran sobre los indios; ordenando, a la vez, el reparto de los terrenos comunales entre los indios americanos mayores de 25 años, dando derechos a los indios a las becas de los Colegios de Ultramar.

Tal resultado legislativo fácilmente se comprende como un triunfo de las ideas liberales de aquellas Cortes.

#### E) *Señoríos y vasallajes*

Fueron las deliberaciones referentes a la abolición de los señoríos y vasallajes verdaderas batallas parlamentarias, reñidas entre la nobleza, por un lado, y los representantes que se sentían del pueblo, casi todos ellos del grupo liberal, por otro, y que, al fin, terminó con un rotundo triunfo de éstos.

Como indica M. Calvo Marco, «resaltan a primera vista, en toda aquella discusión, y contrastan la moderación y templanza de los evolucionistas con la violenta pasión de los mantenedores del privilegio que por algunos fue defendido como un derecho». Con fecha de 4 de julio, remitieron algunos Grandes de España, dueños de señoríos, una audaz Exposición a las Cortes, pidiendo no tomasen en consideración la proposición presentada sobre la reversión a la Corona de los bienes que decían tener con justo título y por voluntad del pueblo». Sin embargo, el Sr. García Herrero, en la sesión del 1 de julio de 1811, supo demostrar que ya en el Fuero Viejo se decía al Monarca que no podía dividir el señorío del Reino, y que esos privilegios se fundaron siempre en la inobediencia de las leyes por la arbitrariedad y el despotismo de los reyes, siendo su causa «la ambición, pasión primogénita de

los príncipes, que siempre está en acecho para sacudir el yugo de la ley, sobreponerse a ella y hacerse árbitra del Reino», a juicio de Fernando de los Ríos.

Entre los que defendieron la abolición, citaremos a Argüelles, quien en una sesión pronunció un discurso tan elocuente, tan ilustrado y patriótico que el Presidente se vio precisado a levantar la sesión, por los nutridos y unánimes aplausos con que el pueblo acogió tan notable oración. También merece mención el desinteresado Conde de Toreno, que en la sesión del 1 de julio hizo la siguiente declaración: «Yo, dueño de varios señoríos, pido al señor García Herrero que fije las posiciones que ha dicho, y ruego al Congreso encarecidamente se digne aprobarlas desde luego».

La reincorporación de los señoríos a la Nación, no a la Corona, así como la abolición de todo signo de vasallaje, quedó aprobada definitivamente; y, para ver la gran importancia de este acuerdo del Congreso, basta recordar el siguiente aserto de Calvo Marco: «A los que han tachado de debilidad aquellas Cortes, por su vacilación y falta de energía para llevar a cabo algunas resoluciones importantes, tan tenazmente combatidas por los enemigos de toda reforma, les recordamos fijen la atención en estas y otras resoluciones, llevadas a feliz término, a pesar de la ruda guerra de poderosas corporaciones y de las dificultades y los obstáculos que a cada paso se ponían en su camino».

#### F) *El Voto a Santiago*

Ya de muy antiguo se habían venido solicitando litigios entre varios pueblos que negaban la legitimidad del Voto de Santiago y su Iglesia Catedral. A pesar de que, en muchos casos, esta carga quedó abolida, y en otros, alterada, a cuasa de fallo de los Tribunales, producía, no obstante, muy pingües rendimientos a los canónigos de aquella Iglesia, a cuyas manos iban a parar tan saneados productos.

En sesión de primero de mayo de 1812, presentaron treinta y seis Diputados una proposición pidiendo su abolición.

Hasta ocho meses después, no se comenzó el debate sobre ella. Este lo abrió D. Simón López, en el sentido de defender la legitimidad de voto, y en su oración pedía «que, por tratarse de unos derechos pertenecientes a la Iglesia, ésta, el Papa o los Obispos, debían de intervenir en el asunto, o si no, que éste pasase al Tribunal Supremo de Justicia».

Fueron sus impugnadores Villanueva, eclesiástico erudito, que trató de demostrar la ilegitimidad de este privilegio; pero, en realidad, quien dejó plenamente demostrada esta ilegitimidad, fue el Abad de Villamartín, Ruiz del Padrón, quien lo combatió fundamentalmente desde el punto de vista histórico. «En este decantado privilegio, decía, se ve la firma de la reina doña Urraca; de Dulcio, arzobispo de Cantabria; de Salomón, obispo de Astorga; de Pedro, obispo de Iria; y de otros muchos Prelados, que omito por ser molesto. Pero en cada firma o suscripción no se ve sino un torpe anacronismo. La mujer de Ramiro I no fue Urraca, sino Paterna. Ni hubo tal Dulcio, ni tal silla de Cantabria se conoció jamás en la historia clásica; ni se usaba en España en aquella era el título de arzobispo, sino el de metropolitano. No se halla en la cronología de los obispos de Iria, de aquel tiempo, ningún Pedro, y el Salomón, obispo de Astorga, no aparece en la historia de esta Iglesia, sino un siglo después. Tanto error y anacronismo prueban, más que suficientemente, la falsedad del privilegio».

Después del discurso de Ruiz del Padrón, defendieron también la abolición Toreno, Torreros y otros, y hasta tal punto llegaron a convencer a la Asamblea de la ilegitimidad del voto, que sus defensores se concretaron a pedir sencillamente que fuese oída la iglesia, para que, mientras tanto, los canónigos siguieran recibiendo el tributo; mas ya no se podía retroceder sin gran escándalo, ni las Cortes generales y extraordinarias estaban dispuestas a ello, y coronaron dignamente su obra constitucional con la abolición del Voto de Santiago.

«Resolución tan justa y beneficiosa para la agricultura, principal ramo de nuestra riqueza, proporcionó a los labradores un desahogo tan grande que sus ventajas sólo podían

compararse a las obtenidas con la abolición de los señoríos», como subraya M. Calvo Marco.

Es de notar que, a este triunfo de las ideas democráticas de las Cortes de Cádiz, colaboraron notablemente gran parte de los Diputados eclesiásticos, y si bien no es de extrañar esta actitud en algunos que tenían bien probada su ideología abierta en toda orientación nueva, en otros se puede sospechar que, más que el espíritu de liberalidad y justicia, influyera en ellos, para tal determinación, la envidia hacia los ricos clérigos compostelanos.

#### G) *La Inquisición*

Tuvimos anteriormente ocasión de hablar de esta institución, y dejamos sentado que ella significaba, durante toda la Edad Moderna española, el medio más importante de que se valía la Iglesia para influir, y hasta intervenir directamente en la vida política de nuestra patria. Un insigne tratadista, Lea, ha demostrado que la gran importancia de la Inquisición española iba disminuyendo durante todo el siglo XVIII, de tal forma que es enorme la diferencia de su poder, durante los siglos XVI y XVII, y los últimos años del XVIII. Pero, no obstante, sería un error suponer que esta institución había perdido toda su importancia; aún en los años que precedieron a las Cortes de Cádiz es la Inquisición algo que no se puede echar en olvido.

Con motivo del enojoso asunto referente a D. Bartolomé José Gallego, por la publicación de su «Diccionario crítico-burlesco», hubo de presentarse en las Cortes una proposición que afirmaba que «El Tribunal de la Inquisición es incompatible con la Constitución», y, tras de rudos ataques de los enemigos de la libertad, fue aprobada por noventa votos contra sesenta.

La posición sostenida por los partidarios de la abolición de la Inquisición está perfectamente definida por las siguientes palabras del Sr. Calatrava: «Declarada ya por el Congreso la incompatibilidad de la Inquisición con la Constitución, no

quedan más alternativas que, o quemar la Constitución, o abolir la Inquisición. Por mi parte, yo juro ante V. M. y a la faz de la Nación, que me expatriaría si la Inquisición se restableciese. Soy y quiero ser católico apostólico romano, pero quiero ser libre. Deseo cumplir mis deberes, pero no quiero ser juguete de un déspota, ni la víctima del fanatismo».

Acabada la abolición del Santo Oficio por las Cortes, empieza la parte más interesante de este tema, habiendo presentado Gutiérrez Terán cuatro proposiciones, aprobadas el mismo día de su presentación, en las que pedía: primero: que una comisión redactara un manifiesto en el que se expusieran las razones que las Cortes habían tenido para abolir la Inquisición; segundo: que este manifiesto y el Decreto de abolición se leyera tres domingos seguidos en la parroquia; tercero: que en tres días, a partir del conocimiento de la disposición, se destruyeran los signos de castigo y penas de la Inquisición; y cuarto: que se propusiese el destino que había de darse al Archivo del extinguido Tribunal. El elemento clerical, apoyado por la Regencia y el Nuncio de Su Santidad, emprendió la campaña más activa contra aquella Asamblea y contra sus decisiones.

La campaña no se limitó a hacer una propaganda contra las Cortes, sino que, en contra de lo dispuesto por ellas, de que la Regencia pusiera en vigor el Decreto, facultad que le correspondía como poder ejecutivo, ésta se limitó a comunicar al Congreso que, en virtud de un escrito recibido del Cabildo, curas párrocos y Vicario de Cádiz —en el que después se ha demostrado que ella tuvo intervención, aunque indirecta—, no había tomado medidas para obligar al exacto cumplimiento del Decreto, por temor a que se turbase el orden, lo que ponía en conocimiento de las Cortes, para que éstas resolvieran.

Sospechosa ya la Regencia de antes, fue acusada por Argüelles ante las Cortes de complicidad con el elemento de la oposición, y en la sesión del 8 de marzo de 1813 se acordó su cese y el nombramiento de otra interina de tres miembros. Habían constituido la Regencia del Quintillo el duque del Infantado D. Juan Mosquera, el general Villavicencio, D. Igna-

cio Rodríguez y el teniente general D. Enrique O'Donnell, sustituido luego, al renunciar el cargo, por D. Juan Pérez Villamil; constituían la nueva regencia provisional D. Pedro Agar, D. Gabriel Ciscar y D. Luis de Borbón, Arzobispo de Toledo.

Mientras tanto, el Arzobispo de Nicea, Nuncio de Su Santidad en España, había hecho todo lo que tuvo a su alcance contra la abolición de la Inquisición. Había solicitado de la Regencia la suspensión de la ejecución del Decreto, hasta obtener la licencia pontificia, y había dirigido el 5 de marzo una carta a las dignidades de la Iglesia, exhortándolas a que se resistieran al cumplimiento del Decreto, como lo estaba dispuesto a hacer el Cabildo de Cádiz, «porque de ese modo prestaban un servicio importante a la Religión, a la Iglesia y al Santísimo Padre, cuya autoridad y derechos querían perjudicar».

En una circular que el Cardenal-Presidente dirigía a los párrocos y al Cabildo, les ordenaba cumplir los acuerdos de las Cortes, y, a la vez, refiriéndose al Nuncio, le censuraba durísimamente, diciendo de él, entre otras cosas, las siguientes: «Hablando con la Regencia, interesa el celo de los ministros de la Religión; y hablando con estos ministros ofende la misma Religión, tomando su nombre para promover insurrecciones que ella condena». «¿Qué no puede temer la Nación de este Prelado extranjero que, olvidando los respetos de su dignidad y de su misión, de Embajador que era de la Cabeza de la Iglesia, se convierte en agitador de intereses ajenos al Primado del orden y de jurisdicción, que compete a Su Santidad, y en atizador de una discordia, cuyo resultado había de ser una guerra civil?».

No obstante la Circular del Cardenal Borbón, persistió el Nuncio en su empeño, y resultado de su campaña fue el proceso de varios eclesiásticos, y, como él se negara a dar las satisfacciones que se le pedían, el 7 de julio se le dio el pasaporte, trasladándosele a la frontera de Portugal, desde donde siguió su campaña contra las Cortes y el Gobierno.

De todo lo dicho, se desprende la gran importancia que la abolición de la Inquisición llegó a tener. La enorme resistencia que se hizo a ella resalta más el triunfo que supone su

acuerdo, y, aunque en otras ocasiones aquellos legisladores del 12 pusieron a prueba la profundidad de sus ideas liberales, nunca fue más patente ese sentir liberal, ni tuvieron en ningún caso necesidad de más valor para restablecerlo, y llevarlo a la práctica, que con motivo de la exitosa abolición del Tribunal de la Inquisición.

#### H) *La Constitución*

Ya hemos dicho anteriormente que la Constitución de 1812 fue el principal fruto legislativo de las Cortes de Cádiz. Su importancia fácilmente podemos apreciarla, si consideramos que es «el punto de partida de la evolución política contemporánea de España y de nuestra Historia Constitucional», y que «fue la bandera del liberalismo europeo y americano en todo el primer tercio del siglo XIX». Sin embargo, «la Constitución doceañista no fue, como muchos suponen, radicalmente liberal. Más que esto, fue una Constitución de acentuado carácter democrático», afirma Rafael M. de Labra.

Sobre los legisladores del doce, como ya veremos en el transcurso del estudio del Código que hicieron, pesó mucho la influencia francesa, en el momento de confeccionar aquella Carta constitucional. Mas, ni esa influencia ni otras extranjeras que pudieran sentirse, nunca fueron lo suficientemente fuertes para borrar por completo las huellas de los elementos tradicionales; y en el mismo discurso preliminar se sostiene que «nada hay en el proyecto que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos legislativos de Aragón, Navarra y Castilla»: afirmación que, aunque peca de exagerada, tiene un gran fondo de verdad.

Es nuestra Constitución de Cádiz un verdadero triunfo de aquellos congresistas, si bien estamos muy lejos de afirmar, por no ser cierto, que fuera una obra perfecta, ya que tuvo sus defectos, entre los que sobresalen los siguientes: lo prolija y concienzudamente que enumera, en su artículo 131, las facultades del Parlamento, especificando hasta veintiséis, con casuismo, enojoso: entre ellas las había de carácter resuel-



tamente administrativo que implica la confusión de poderes, como la de promover y fomentar toda clase de industria y la de aprobar los reglamentos generales para la policía y sanidad del Reino; el de no consagrar «ningún capítulo especial a las garantías individuales, aunque consigne, en diversos artículos, algunos derechos de la personalidad», como indica Wenceslao Roces; y otros, en fin, de los que nos iremos ocupando a su debido tiempo.

D. Antonio Olivero, sacerdote extremeño, fue quien, el 9 de noviembre de 1810, presentó una proposición para que se nombrara una comisión compuesta de ocho individuos, por lo menos, que preparara un proyecto de Constitución política de la Monarquía. Prosperó esta proposición, y, bajo la presidencia de Muñoz Torrero, se consignó la comisión, compuesta de quince miembros (Argüelles, Fernández Leyva, Rodríguez Bárcena, Morales Duárez, Mendiola, Espiga, Rich Cañado, Gutiérrez de la Huerta, Oliveros, Páez, Jáuregui y Valiente), de los cuales seis eran americanos y seis clérigos, y que tenía por secretario a Pérez de Castro.

Tardó casi un año la comisión en presentar el proyecto, lo que hizo en tres etapas; y, por fin, el 11 de marzo de 1812, fue aprobada la Constitución, el 19 publicada y jurada por los 184 diputados presentes, que firmaron dos originales, que, tras de muchas vicisitudes, quedaron en el Archivo del Congreso.

#### a) *Forma y sentido moral de la Constitución de 1812*

Al comenzar el estudio, vamos a hacerlo ocupándonos, en primer lugar, de la forma y el sentido moral en que está concebida.

Consta de 384 artículos, repartidos entre 10 títulos, que tratan: (I) De la nación española y los espacios; (II) Del territorio de España, su religión, su gobierno y de los ciudadanos españoles; (III) De las Cortes; (IV) Del Rey; (V) De los tribunales y administración de Justicia civil y criminal; (VI) Del gobierno de las provincias y de los pueblos; (VII) De las



contribuciones; (VIII) De la fuerza militar nacional; (IX) De la Instrucción pública, y (X) De la Constitución y modo de proceder para hacer la revisión de ella.

Desde el primer golpe de vista, se puede apreciar que la Constitución formal del Código gaditano obedece a la teoría de separación de poderes, y también puede juzgarse, desde esa primera visión, que existe en la ordenación de sus materias cierta confusión que se agrava mucho más por el excesivo casuismo del que ya hicimos mención.

El sentido con que fue hecha la Constitución podemos apreciarlo en las siguientes ideas informadoras de la misma: a) En el propio encabezamiento de la Constitución —«En nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Autor y Supremo Legislador de la Sociedad. Las Cortes Generales y Extraordinarias, bien convencidas, después del más detenido examen y madura deliberación, de que las antiguas leyes de la Monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y precauciones que aseguran de un modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de la nación, decretan la siguiente constitución política, para el buen gobierno y recta administración del Estado»—, que pone de manifiesto que aquellos legisladores, en contra de la teoría del origen del poder en boga durante los siglos XVI y XVII, sustentaron la de Santo Tomás de que el poder viene de Dios al pueblo, que lo puede transmitir al Rey. b) En el artículo 4 —«La nación está obligada a conservar y proteger las leyes sabias y justas, la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen»—, que con razón ha sido calificado de candoroso. c) En el artículo 6 —«El amor a la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo la de ser justos y benéficos»—, no menos cándido que el anterior. d) En el artículo 13 —«El objeto del gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de todas las sociedades políticas no es otro que el bienestar de todos los individuos que la componen»—, en el que se refleja un gran espíritu social.

b) *De la Nación española, la ciudadanía  
y la soberanía nacional*

Bajo este epígrafe, nosotros nos vamos a ocupar de todas aquellas declaraciones que están distribuidas en los capítulos primero y segundo de la Constitución, y que tratan de las consideraciones generales sobre la Nación española y sobre su soberanía.

*Nación.* El artículo 1 de la Constitución establece que «La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios», con lo cual no hace otra cosa que ratificar el concepto que sobre lo mismo se había ya sustentado en la convocatoria de Cortes.

El artículo 5 prescribe que «son españoles: Primero, todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de España y los hijos de éstos. Segundo, los extranjeros naturalizados por gracia de la Corte. Tercero, los que, sin ésta, llevaran diez años de vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía; y, por último, los libertos desde que adquirieron libertad en las Españas». De donde resulta que este Código admite tácitamente la existencia de la esclavitud, y niega el carácter de español al esclavo, si bien le reconoce la facultad de adquirirlo, con el solo procedimiento de adquirir la libertad.

El artículo 10 hace una enumeración nominal de todos los territorios de la nacionalidad española, con lo que completa su sentido de Nación: esos territorios eran los de la metrópoli y todos los que antes se conocían con el nombre de colonias o factorías.

*Ciudadanía.* Tal vez la parte más retrógrada de aquella Constitución sea la que se refiere al tratamiento que dispensa al concepto de ciudadanía. En él se advierte que, en lugar de asumir el criterio democrático de considerar a todos los ciudadanos iguales, establece una clasificación, puede decirse, de tres grupos de personas, que son: el individuo libre u hombre no esclavo; el español, cuyos caracteres ya conocemos, y el ciudadano, que a más de todos los derechos y obligaciones del español lleva implícitos los derechos electorales y el de

aspirar a cargos públicos. Eran ciudadanos, según el artículo 18, «aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen en los dominios españoles de ambos hemisferios, y están vecindados en cualquier pueblo de aquellos dominios», con lo que sigue el falso criterio aristocrático, para conceder la ciudadanía, de exigir circunstancias de origen, aparte de la vecindad.

Como por otra parte los artículos 1, 2, 5 y 10 venían a ratificar el criterio de «que los vastos y precisos dominios que España poseía en las Indias no eran propiamente colonias o factorías como otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la Monarquía española», se daba el caso de que los 25 millones de habitantes de España estaban divididos de tal forma que la India sola tenía cerca de quince millones, y de éstos ocho eran propiamente indios, cuatro negros o mestizos, y el resto blancos, y, siendo el sufragio general, ocurría que la representación de las provincias de ultramar sería mayor en número que la de la península, y, no queriendo esto, que era de razón, los legisladores solucionaron la cuestión con el artículo 22, que dice así: «A los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios de Africa, les quedan abiertas las puertas de la virtud y merecimiento para ser ciudadanos; en su consecuencia, las Cortes concederán carta de ciudadanía a los que hicieran servicio señalado a la patria o a los que soliciten, con la condición de que sean hijos legítimos de padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, y estén vecindados en los dominios de España, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con capital propio».

Este artículo, que aparte de entrañar una patente injusticia y una intolerable desconsideración para con los españoles de América estaba en oposición con los otros antes citados, fue con razón duramente combatido por Mejías, Alcocer, Castillo y otros, y, a la larga, causa de descontento, que había de convertirse en espíritu de independencia.

Otro procedimiento, poco democrático pero de mayor justicia, pudieron seguir aquellos legisladores para combatir la probable superioridad americana: hubiera sido limitar el su-

fragio a determinadas elementales condiciones culturales y de capacidad del individuo. En todo caso, el criterio que siguieron fue un gran error de aquellos diputados.

Aun subsanando este error por el procedimiento indicado, todavía estaría muy lejos nuestra Constitución de las teorías que, en contra de las ideas antiguas de considerar al extranjero como un bárbaro sin derechos, reconocen un derecho natural, que ampara igualmente a todos y para el que no existen fronteras ni discriminaciones.

*Soberanía.* El criterio extremista de que la actividad del Congreso había de llegar hasta independizar al pueblo, no solamente de los invasores, sino de la voluntad del monarca, triunfa plenamente cuando las Cortes se ocupan del capítulo referente a la soberanía. En sus acuerdos se ve un rotundo triunfo de las ideas de la Revolución Francesa sobre los principios decadentes del absolutismo.

Antes aun de comenzar a hacer la Constitución, habían dado ya pruebas aquellos Diputados de la firme convicción de su criterio de que la soberanía residía en el pueblo. El hecho mismo de constituirse en poder soberano como Cortes y dar a éstas el tratamiento de Majestad, el de declarar nula la cesión de la Corona hecha por Fernando VII, «no sólo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales, sino principalmente por faltarle el consentimiento de la Nación», lo demuestran rotundamente. Pero, además lo hacen constar de una manera patente y repetida en diferentes pasajes de la Constitución: en su prólogo —«D. Fernando VII, por la gracia de Dios y de la Monarquía española, Rey de España, y, en su ausencia y cautividad, la Regencia del Reino nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente Constitución política de la Monarquía»—, en el artículo 3 —«La soberanía reside esencialmente en la Nación, y, por lo tanto, pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales»—, y en otros diversos preceptos.

De los dos sistemas constitucionales más conocidos durante el siglo XIX, se separa nuestra Constitución del doce.

Del de Constitución otorgada la separa un abismo, y con el de Constitución concertada tiene fundamentales diferencias. De su estructura ha podido decir Valle Iberlucea que, «a pesar de haber mantenido, por respeto a la tradición, la forma de gobierno monárquico, tuvo en su esencia un carácter republicano».

### c) *La Religión*

En el Título II se ocupa la Constitución de Cádiz de la materia religiosa, pero, antes de haber deliberado sobre este asunto, las Cortes, en la serie de ceremonias que precedieron a algunos de sus actos, como juramentos, y en el encabezamiento del mismo Código constitucional, habían ya manifestado cuál era su criterio al respecto.

Dice la Constitución, en su artículo 12, que la «Religión de la Nación es y será siempre la católica, apostólica y romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra». En los artículos 46, 47, 58, 71 y 86 ratifica este criterio, dando intervención a los sacerdotes y ordenando ciertas solemnidades religiosas en determinados actos públicos; y, por fin, reflejan el mismo espíritu todos aquellos artículos que se refieren a los juramentos que, sobre los Evangelios, habían de prestar el Rey, el Príncipe de Asturias, los Diputados...

Por otro lado, en los artículos 171 y 237, reconoce la Constitución al Rey la facultad de intervenir en algunos asuntos eclesiásticos, con lo que sigue el criterio de la estrecha relación entre la Iglesia y el Estado, que hasta ahora ha existido, sin preludios de cambio, en España.

A simple vista, resalta que la afirmación dogmática del artículo 12, de que el Catolicismo es la única religión verdadera, es impropia de un Código de leyes; y en cuanto a la otra afirmación, de que la religión de la nación española es la católica, apostólica y romana, es combatida por los que piensan que la nación, como tal nación, con sus atributos característicos, no puede hacer profesión de fe católica, ni de

ninguna otra creencia, porque la religiosidad de los más no implica la de los menos, y, no siendo la doctrina católica una doctrina que se base en el criterio de las mayorías, sino en el de la fe personalísima del individuo, mal se podía imponer en ninguna sociedad en cuanto haya aunque sea una sola persona no creyente, y estiman que, de no desentenderse por completo de esta materia, sólo debía de haberse reconocido, como lo hace la Constitución francesa de 1791, que la mayoría de los españoles eran católicos, apostólicos y romanos.

En cuanto al aserto de que la religión católica sería perpetuamente la de la nación española, es una profecía curiosa, expuesta a todos los peligros de equivocarse que tienen las profecías, y que, según parece, no ha tenido visos de acierto histórico.

Mayor interés merece el punto de que la nación prohíbe el ejercicio de ninguna otra. Esta afirmación es una prórroga de la intolerancia tradicional entre nosotros, y, antes de hacerla, los diputados doceañistas debieron tener en cuenta que, por esa intolerancia, en el siglo XVI se expulsó de nuestro suelo a los judíos, con lo que se empobreció nuestro comercio, y que en el siglo XVII, por ella, salieron de España los moriscos y mudéjares, con lo que se convirtieron en páramos ricos terrenos labrados por ellos, que por ella dejamos muy atrás al exclusivismo de los fanáticos árabes, y que por ella murieron muchos hombres en la hoguera.

Injusto parece, en este plano de libertad de conciencia, el mero hecho de no reconocerla, aunque no tanto como el que, después de reconocida, se protejan a los que crean de una forma con menoscabo de los que crean de otra. Más justa era la idea de la Ley austríaca de 1867, que dispone: «El goce de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos es independiente de toda confesión religiosa», y establece «la libertad de los ejercicios religiosos en edificios privados».

Pero con todo no hay que olvidar que aquellos Diputados vivían en España, y en la España de primeros del siglo XIX; que en aquella Asamblea, una tercera parte de los Diputados eran sacerdotes, que agregaban a su influencia tradicional sobre el inculto pueblo la que le daba su actitud de lucha con-

tra Napoleón, y que, por tanto, suponían una gran opinión a favor de lo que allí legislaron; o, lo que es igual, que su error al deliberar sobre este asunto era un error del tiempo y del lugar.

En cambio, es curioso, y debe por ello mencionarse que, a través del Código fundamental del doce, se nota una intención de disminuir el poder del clero, conforme al sentido de la época de Carlos III.

#### d) *De las Cortes*

La influencia del autor del «Espíritu de las leyes» se ve reflejada claramente en los acuerdos de los legisladores gaditanos, al tratar en su Constitución de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que ellos cuidan de establecer, limitando sus facultades de tal forma que haya una perfecta distinción entre ellos.

«La potestad de hacer las leyes corresponde a las Cortes con el Rey», dice el artículo 15 de la Constitución, pero después, y en el supuesto de que el Rey por dos veces se negara a dar la sanción a un proyecto de ley aprobado por ella, dice el artículo 149, por «si de nuevo y por tercera vez fuera propuesto y admitido y aprobado el mismo proyecto en las Cortes del siguiente año, por el mismo hecho se entiende que el Rey da su sanción», con lo cual no se hace otra cosa que dar a las Cortes facultades de hacer leyes, independientemente y aun en contra de la voluntad del Rey.

El artículo 27 define las Cortes como «la reunión de todos los diputados que representan la nación, nombrados por los ciudadanos en la forma prescrita por la Ley constitucional», con lo cual tienen respecto al diputado la misma idea que expresa Sieyès en estos términos: «el diputado lo es de la nación; es el mandatario de todos los ciudadanos del país», en contra de la tradición española de que el diputado sólo representaba el distrito que le designaba y cuyos intereses eran los que le interesaban.

Prevalecieron, a la hora de tratar de cuantas Cámaras ha-



bían de constar las Cortes, las ideas francesas de Cámara única, contra las influencias inglesas de doble Cámara, llegadas a España por mediación de Jovellanos, y que hubieran significado un cambio menos radical. Se establece en la Ley constitucional (artículos 104-112) que los Diputados han de constituirse en un solo Cuerpo o Cámara, y que se abría todos los años, debiendo reunirse todos los diputados por virtud de un precepto legal y sin necesidad de convocatoria real, con lo que se independiza, por completo, el poder legislativo del poder ejecutivo. El Rey podía, no obstante, convocar Cortes generales y extraordinarias cuando la importancia y urgencia de un asunto lo reclamara, y estas Cortes no tenían otra facultad que la de tratar sobre el asunto causa de su convocatoria (artículos 161-162).

La Constitución doceañista creó una institución de gran importancia: «La Diputación permanente de las Cortes», compuesta de siete miembros —tres peninsulares, tres americanos y el otro a elección—, nombrados por la Cámara, que hasta las inmediatas Cortes tendrían como facultades principales velar por la observancia de la Constitución y de las leyes, convocar a Cortes extraordinarias en los casos previstos por la Constitución, acordar lo necesario en el caso de inhabilitación del Rey mientras se reúnen Cortes extraordinarias, y otras competencias más. Supone esta institución la personificación del poder legislativo, con una posición de vigilancia y control, frente a los otros poderes.

Si nos ocupamos de las facultades de las Cortes, «se ve que el legislador doceañista se fijó principal y determinada mente en la función legislativa de las Cortes, dejando un poco a un lado, por inadvertencia o por intención, el carácter gubernamental o fiscalizador que distingue el régimen parlamentario moderno», sin que por esto se pueda decir, con palabras de Rafael M. de Labra, «que la tendencia anti-parlamentaria, de que se habla en estos tiempos tanto, no aparezca consagrada, ni mucho menos robustecida, en la Constitución gaditana.

En cuanto al sufragio, es universal, pero en tres grados y de un original y complicado procedimiento electoral, exi-



giendo a los Diputados, a más de ser ciudadanos de veinticinco años en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, condiciones tan singulares, como siete años de vecindad en un pueblo de Monarquía, y ciertas rentas de bienes de su propiedad; condiciones que contrastan con el criterio demócrata y unitario de aquel Congreso.

El cargo de Diputado, que duraba dos años, sólo era incompatible con el de Ministro de la Corona, y gozaban los que lo desempeñaban de inviolabilidad por su opinión y voto; de dietas, así como los privilegios de no poder ser demandado ni ejecutado por deuda, hasta un mes después de cesar en su cargo, y de que, en lo criminal, serían juzgados por un Tribunal de Cortes, que éstas constituirían.

#### e) *Del Rey y sus Ministros*

Se ocupa del Rey y sus Ministros el Título IV de la Constitución.

Fue tenaz empeño de los legisladores del doce armonizar el principio de la soberanía nacional con el régimen tradicional monárquico. Quisieron para ello buscar precedentes en nuestra historia: encontraron algunos, que la crítica histórica moderna los considera como más o menos ciertos, en nuestras monarquías medievales, pero olvidaron que difícilmente triunfarían en su empeño proclamando la soberanía popular, a la vez que «el derecho hereditario de una dinastía cuya representación histórica era, y no podía por menor de ser, todo lo contrario a aquella afirmación», señala De Labra, y este olvido luego veremos de lo que es causa.

La fórmula de juramento que ha de prestar el Rey, al subir al trono, condensa todos los derechos y deberes de aquella Constitución que se concedían a la Corona, y en ella vamos nosotros a estudiar la Monarquía según la concibieron aquellos Diputados.

«Nos..., por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, Rey de España, juro por Dios y por los Santos Evangelios que defenderé y conservaré la Religión ca-

tólica, apostólica, romana, sin permitir alguna otra en el Reino; que guardaré y haré guardar la Constitución política y las leyes de la Monarquía española, no mirando en cuanto hiciere sino al bien y al provecho de ella; que no enajenaré, cederé ni desmembraré parte alguna del Reino; que no exigiré jamás parte alguna de frutos, dinero ni cosas, si no lo hubieran decretado las Cortes; que no tomaré jamás a nadie su propiedad y respetaré sobre todo la libertad política de la Nación, y la persona de cada individuo; y si, en lo jurado o parte de ello, lo contrario hiciere, sea nulo y de ningún valor. Así Dios me ayude, y sea en mi defensa, y si no me lo demande».

Empieza, pues, por reconocerse que es Rey en fin «por la Gracia de Dios y de la Constitución», o, lo que es lo mismo, que pierde el carácter exclusivo de poder divino, que hasta entonces había sustentado el Rey de España. Jura luego guardar la Constitución, y, como en ella se dice, en su artículo 181, que «las Cortes deberán de excluir de la sucesión a aquella persona o personas que sean incapaces de gobernar o hayan hecho cosa por que merezcan perder la Corona», implícitamente reconoce el derecho de la Nación a disponer del trono como cosa propia, no a considerarlo como patrimonio de ninguna familia. Jura también no desmembrar parte del reino o, lo que es lo mismo, reconoce no tener ningún derecho de disponer de los territorios nacionales como cosa suya. Dice que no exigirá impuestos no votados por las Cortes, lo que significa un reconocimiento de los fueros que los pueblos medievales españoles tenían ante los reyes, y el principio de lo que, en los modernos regímenes parlamentarios, es la llave de todas las cuestiones. No tomaré jamás a nadie la propiedad, dice, y, al decir esto, copia el pensamiento del régimen inglés expresado por Joven Pitt con estas palabras: «La casa de cada hombre de la nación inglesa es una fortaleza, no porque la defiende un foso o una muralla, pues bien puede ser una cabaña de paja; el viento puede rugir alrededor y la lluvia entrar, pero el rey no», y ese pensamiento, junto con la afirmación de respeto a la persona de cada individuo, significa las garantías máximas del individuo frente la Estado.

Respetaré la libertad política de la Nación, dice luego, y, en esta afirmación, algunos ven hasta el reconocimiento, por parte del Rey, del derecho de la Nación a cambiar de régimen cuando a bien lo tenga. Dice, por último, «y, si en lo que he jurado o parte de ello, lo contrario hiciere, no debo ser obedecido»; antes bien, aquello que contraviniere «sea nulo y sin ningún valor». Ello es el mayor triunfo del principio del no valor de las disposiciones anticonstitucionales, según el cual toda disposición anticonstitucional carece de fuerza obligatoria, frente a todos y a todos los efectos, pudiendo generar responsabilidad jurídico-penal.

De lo mencionado, y de otras muchas más disposiciones que limitan la potestad real, se deduce que la Monarquía que conformaban los legisladores de Cádiz, por la limitación que tiene, no igualaba con ninguna otra de sus contemporáneos regímenes monárquicos populares, fue más una Monarquía restringida que una Monarquía moderada.

Venía a completar las limitaciones de la autoridad del trono la disposición constitucional de que no tenían ningún valor las disposiciones reales si no iban refrendadas con la firma de un ministro, que por ese hecho se hacía responsable, ya que, según la Constitución, la persona de Su Majestad Católica «es sagrada e inviolable y no está sujeta a responsabilidad alguna» (artículo 168).

Con razón se ha podido decir que, con el nombre de Monarquía, configuraron aquellos Diputados una República, cosa natural, si se tiene en cuenta que «la República es, por regla general, la forma de gobierno más avanzada, más culta y más propia de un régimen democrático, que supone la Soberanía nacional», principio que en ellos tuvo una significación fundamental.

Mas no es de extrañar que aquellas Cortes no abolieran la Monarquía como institución, porque, de un lado, la tradición monárquica estaba muy arraigada en nuestra patria, y, de otro, Fernando VII era el Rey deseado, coronado por el pueblo en un motín frente al favorito Godoy, y el prisionero de Napoleón, gran enemigo de España.

En cuanto a los Ministros de la Corona, enumera la Cons-

titución el de Estado, Gobernación de la Península, Gobernación de Ultramar, de Gracia y Justicia, de Hacienda y de Guerra y Marina, previendo que en un reglamento especial, aprobado por las Cortes, se fijarían los negocios que debían pertenecer a cada Ministerio.

Los Ministros tendrían que hacer todos los años el presupuesto de su Departamento y rendir las cuentas del año anterior. Estarían representados, en las capitales de provincia y en los pueblos, por el Jefe político y el Alcalde, que presidirían a su vez las Diputaciones y los Ayuntamientos; y por último, serían responsables, ante las Cortes, de las disposiciones que autorizaran con su firma contra la Constitución o las leyes, «sin que le sirviera de disculpa el haberlo mandado el Rey» (artículo 226).

#### f) *De los Tribunales*

Es el tercer poder del Estado, según la Constitución del doce, el Judicial, «que reside en los Tribunales establecidos por las leyes» (artículo 17): «La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los Tribunales» (artículo 242), que «no podrán ejercer más función que la de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado» (artículo 245), pero tampoco «ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar causa pendiente ni abrir los juicios fenecidos» (artículo 243).

Como se ve, aquel Código constitucional determina perfectamente la separación e independencia del Poder Judicial, fijando su función sin dejar lugar a dudas o confusiones con los otros Poderes.

Dedica la Constitución gaditana todo su Título V al Poder Judicial, y lo hace con tanto mérito que todas las alabanzas serían pocas. Supone lo legislado un avance tan grande, no sólo desde el punto de vista del Derecho, sino también de la cultura social, que difícilmente podría comentarse en un resumido trabajo.

En este Título hay disposiciones que nos maravillan si

pensamos en la época que fueron dadas: la de que ningún español podrá ser juzgado sino por el Tribunal competente (artículo 247); la de que sólo existía un fuero para toda clase de personas (artículo 248); la que establece la inamovilidad de los jueces (artículo 252); la que ordena no detener a ningún español sin causa justificada y sin mandamiento judicial (artículo 287); la que manda levantar el arresto gubernativo dentro de las veinticuatro horas, si no se notifica al arrestado en ese tiempo el auto de procesamiento (artículo 291 y siguientes); la que prohíbe el embargo de los bienes, so pena de que el embargado sea responsable de un delito que lleve consigo responsabilidad pecuniaria (artículos 294 y siguientes); la que prohíbe el tormento (artículo 306); la que declara que la casa del español es sagrada (306), y, en fin, tantas otras más, que meritísimamente suponen avanzados criterios jurídico-penales y procesales.

En cuanto a la organización de Tribunales, sanciona el legislador el juicio de árbitros, establece tres instancias y pone como más alto Tribunal al Supremo de Justicia, que tiene competencia hasta para juzgar a los Ministros del Rey acusados por las Cortes. Este Tribunal, o sus miembros, sólo serían responsables ante otro de nueve miembros, elegidos para el caso por las Cortes.

Con significar todo lo indicado un inconmensurable progreso legislativo en aquel momento histórico, maravilla aún más el artículo 278 —«si con el tiempo creyeran las Cortes que convendría haya distinción entre los jueces de hecho y de derecho, lo establecerán en la forma que juzguen conducente»—, que se adelanta en mucho tiempo a la instauración del Jurado, anunciando y previendo su posibilidad.

Este artículo sustenta seguramente la prueba más rotunda, en síntesis, del predominante sentido demócrata de aquellas Cortes.

g) *Del Gobierno de las provincias y los municipios*

Tiene lugar durante todo el siglo XVIII la gran crisis de nuestro tradicional y pujante régimen municipal. Había caído durante todo este tiempo en una lamentable postración: los cargos políticos dentro del Ayuntamiento se habían hecho patrimonio de familias; se había llegado a la existencia de concejales, pero no en el sentido de las modernas teorías feministas, sino que la concejala era la heredera de la concejalía que desempeñaran sus antecesores, y que ella disfrutaba por medio de la representación de su marido, o de un mandatario. De este lamentable estado vino a sacar a la política municipal el Congreso de Cádiz. Sus Diputados hicieron que todos los concejales fueran elegidos por votación popular: ellos democratizaron la institución del Ayuntamiento.

A pesar de todo esto, tal vez sea lo referente al régimen administrativo la parte donde estuvieron menos afortunados aquellos legisladores. ¿Por qué? Por lo siguiente.

La vida administrativa en España, desde los más remotos tiempos, había venido desenvolviéndose en torno al concepto de región. Los Reyes Católicos, a pesar de llegar a la unidad territorial de la península, dejaron persistir la región en su estructura tradicional, de tal forma que Castilla nunca fue Aragón, ni Aragón Navarra. Los Austrias, o creyeron compatible la existencia del regionalismo con su criterio de autoridad o, si no lo creían, no se atrevieron a hacer desaparecer la unidad histórico-legal de la región, porque ésta persistió; por último, los Borbones venían teniendo durante todo el siglo XVIII un forcejeo constante por imponer su espíritu centralizador, pero no lo habían conseguido plenamente.

Los legisladores del doce, influidos por las reformas administrativas que se habían hecho en la vecina Francia, se proponen y consiguen llegar a la centralización más perfecta y a la uniformidad más absoluta de la administración española. Sin tener en cuenta las circunstancias geográficas ni los antecedentes históricos de cada territorio, dividen la península en provincias, cortadas todas por el mismo patrón; en cada provincia imponen la existencia de una diputación pro-

vincial de tipo común, con funciones determinadas y presidida por el jefe de gobierno; les dan el mismo régimen a todos los municipios, sin preocuparse de las formas tradicionales por que cada uno se administrara; en menos palabras: no respetan la vida administrativa tradicional e indígena encarnada en el pueblo, y tratan de imponer un sistema de administración nuevo y exótico, que difícilmente podía arraigar entre nuestra gente.

Estas son las causas de que aquella democratización de las instituciones municipales no diera el resultado que se esperaba, y, según la opinión del Dr. Zabala, hasta que la estructura administrativa de España no se acople al sistema tradicional de la región, quedará irresuelto plenamente el problema administrativo español.

Todo lo dicho en cuanto a los territorios peninsulares, pues que, en cuanto a los ultramarinos, nos ocuparemos más adelante, por cuanto ello tiene más importantes consecuencias.

#### h) *De las contribuciones*

Es el Título VII el que se refiere y trata de las contribuciones: se dice en él que son las Cortes, y solamente las Cortes, las que podrán votar las contribuciones, según los presupuestos presentados por el Ministerio de Hacienda.

Por esto, aunque la forma de gobierno no era perfectamente parlamentaria, de tal forma que son incompatibles los cargos de Ministro y de Diputado, y que el Rey tenía plena libertad para elegir a los primeros, el hecho de que las Cortes pudieran aprobar o no los presupuestos significa que tenían en su mano el medio para hacer fracasar todos los gabinetes cuando no fueran de su agrado; medio que, como sabemos, se ha prodigado en los modernos regímenes de los Estados actuales.

La disposición de que no habría más aduanas que las de las fronteras y los puertos de mar obedece al criterio de unificación y uniformidad sustentado por aquellos legisladores.



Por otro lado, el precepto que establece que «las contribuciones se repartirán sobre todos los españoles, en proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno», revela un criterio de máxima justicia y muy democrático, que además fue el que con más ardor defendieron los liberales de aquellas Cortes, en contra de la opinión del elemento conservador, compuesto casi todo por los clérigos, grandes y potentados, que, por injusticias de un régimen basado en la arbitrariedad real y el favoritismo palaciego, disfrutaban de grandes bienes, sin contribuir en nada a las cargas del Estado, las que pesaban por completo sobre los pequeños industriales y propietarios.

i) *Del Ejército*

Dedica la Constitución todo su Título VIII a la organización militar de España, y crea dos clases de milicias. Componen la una las fuerzas permanentes de tierra y mar, para la defensa exterior del Estado y la conservación de orden interior; y es la otra un cuerpo de milicianos nacionales que habrá en cada provincia, compuesto de habitantes de la misma, en proporción a su población y circunstancias.

Vemos que uno de los fines que se le reconoce al ejército ordinario era el de la conservación del orden interior. Este criterio muy sustentado durante todo el siglo pasado, principalmente en España, de dar al ejército un carácter de policía, junto con la coincidencia de haberlo empleado en este sentido sólo cuando se trata de alteraciones del orden por asuntos políticos, ha sido causa de que los generales, con esas intervenciones en la política, se hayan sentido «políticos», y casi siempre de parte de los reyes, aunque éstos tuvieran criterios absolutistas, en la lucha moral y a veces material contra el pueblo, tomando ese carácter del ejército como pretexto, y dieran infinidad de golpes de Estado, que España puso de moda con el eufemístico nombre de «pronunciamientos».

Dice también la Constitución, refiriéndose a los ejércitos

permanentes, que las Cortes fijarán anualmente el número de tropas necesarias, y el modo de levantar las que fueran convenientes, así como el número de buques de guerra que han de armarse o conservarse armados.

Un precepto constitucional decía «que las Cortes decretarían las debidas ordenanzas sobre disciplina y organización militar, estableciendo las escuelas militares necesarias». Para dar cumplimiento a este precepto y evitar que cualquier imprevisión pudiera, en tan crítica situación, acarrear la enemistad del ejército, pensaron las Cortes encargar a una Junta de quince generales del ejército y dos de la armada hacer un proyecto de ordenanzas; así lo hicieron, pero hubo de disolverse la Cámara sin que se le presentara el proyecto, y sin saber de este asunto más que las dificultades que la Junta de generales decía encontrar para llevar a cabo su empresa.

Un precepto referente a esta materia, y de gran espíritu democrático, es el artículo 361, que dice: «Ningún español podrá excusarse del servicio militar cuando y en la forma que fuere llamado por la ley». En éste, como en el que establece la igualdad de todos los españoles ante los repartos de las contribuciones, se aprecian dos triunfos de los más liberales, sobre los representantes de las antiguas clases privilegiadas.

En cuanto a las milicias provinciales, eran consideradas como simples auxiliares, cuyo servicio no era previsto sino cuando las circunstancias lo requirieran, pudiendo el Rey emplearlas en caso necesario, dentro de sus provincias, pero no sacarlas de ellas sin decretarlo las Cortes.

#### j) *De la enseñanza*

Son sólo seis artículos los que la legislación constitucional del doce dedica a la instrucción pública, y en ellos se limita a dar unas bases cuyo desarrollo deja a leyes y reglamentos especiales: los seis son interesantísimos, por cuanto en ellos se dispone:

En cuanto a la primera enseñanza, que en todos los pue-

blos de la Monarquía habían de establecerse escuelas de primeras letras, lo que indica que aquellos legisladores tuvieron clara la visión del problema español, que, según certerísimas y célebres frases, no es más que «un problema de cultura»; y, viéndolo claro, proveyeron la única solución que requería, la creación de escuelas, ya que, aunque la legislación hiciera obligatoria la enseñanza, si no hay las suficientes escuelas, necesariamente ha de darse un caso típico de Derecho administrativo, por desgracia padecido en España, de costumbre contra ley.

Por lo que se refiere a la enseñanza secundaria y superior, una vez más se advierte en nuestra legislación gaditana gran influencia francesa. Olvidaron los Diputados del doce que todas nuestras Universidades, que todos nuestros Colegios, mayores y menores, tuvieron su origen en iniciativas particulares; que la mayoría de ellos habían nacido durante el siglo XVI, en que los potentados españoles dieron al mundo un alto ejemplo de filantropía, creando muchos y bien dotados centros de enseñanza, y olvidaron que, por motivos de su origen, las Universidades y Colegios tradicionalmente venían teniendo una vida autónoma. Olvidaron todo esto, y se propusieron establecer y establecieron el tipo de Universidad Napoleónica, que a semejanza de la francesa había de constar de tres grados, el Bachiller, la Licenciatura y el Doctorado, y que también, para el más perfecto parecido con la enseñanza francesa, sería de tipo único para toda España.

Merece que nos ocupemos de las materias que aquella Constitución establecía como base de la enseñanza en los centros del Estado. Eran en las escuelas: leer, escribir, las cuatro reglas aritméticas, el catecismo de la religión católica y una breve exposición de obligaciones y derechos cívicos; y en las Universidades, a más de las materias correspondientes a cada carrera, se explicaría la Constitución política de la Monarquía, y debían enseñarse las Ciencias eclesiásticas y políticas.

Vemos que se orientaba la materia de la enseñanza, a más de la natural lucha contra el analfabetismo, a la formación de buenos creyentes y buenos ciudadanos, y, partiendo de la

base de que se reconocería una religión exclusiva como oficial de la Nación, parecía lógico que en las escuelas nacionales se procurase enseñar esa religión. Es muy de alabar el criterio de formar verdaderos ciudadanos en los centros de enseñanza del Estado, y lo que es de lamentar es que, en las vicisitudes de la vida escolar, desde aquellos tiempos a hoy, haya prevalecido siempre el primer propósito, mientras el segundo se ha olvidado por completo, siendo ello la principal causa de la crisis de ciudadanía por que endémicamente ha venido atravesando España.

En el Título IX, que es el que se refiere a la enseñanza, incluyeron aquellos Diputados el artículo referente a la libertad de imprenta, seguramente porque, careciendo el Código Constitucional de un Título dedicado a las garantías personales, no encontraron otro sitio más apropiado donde colocarlo.

#### k) *De la reforma de la Constitución*

En el Título X, que se dedica a la propia Constitución, se declara que ella es reformable, previendo en los artículos 383 y 384 que está sancionada sin la menor reserva la reforma constitucional, prescindiendo por completo de la sanción regia. Por manera que, en último extremo, las Cortes, si lo estimaran oportuno, podrían suprimir la Monarquía, derogando los artículos 14 y demás de la Constitución, lo que indica, una vez más, que sus autores se ratifican en radicar sólo y exclusivamente en el pueblo.

Para que la reforma de la Constitución se pueda hacer, se necesita una amplia serie de requisitos: de tal forma que había de estar sentida la necesidad de la reforma en más de las dos terceras partes de las Cortes extraordinarias, convocadas para el caso, y que esta necesidad había de estar arraigada durante el largo tiempo que requería el procedimiento de reforma, si no se quería que fracasase el intento.

Por haber puesto esta serie de trabas a la posible reforma del Código constitucinoal, se ha tachado a los Diputados

doceañistas de presunción o soberbia que les impulsaba a pensar que su obra fuera eterna. Pero más justo sería reconocer que lo que ellos querían era evitar los cambios que, obedeciendo a caprichos ideológicos o a luchas políticas que ya en los últimos tiempos del Congreso se adivinaban, abolieran los principios de la Carta constitucional antes de que arraigaran en el espíritu del pueblo.

#### VI.—*Los americanos en las Cortes de Cádiz*

Ya habíamos adelantado que la asistencia de los Diputados americanos en las Cortes de Cádiz daba cierta orientación a los debates en que éstos intervenían, y, por lo que hemos dicho, podemos fácilmente apreciar que aquellos preclaros varones, que representaban los territorios ultramarinos por primera vez en las Cortes de la Metrópoli, intervinieron multitud de veces en casi todas las cuestiones que se plantearon, y en todas las de alguna importancia. Nos toca ahora ocuparnos detalladamente de estos representantes de América, y así lo pensamos hacer, aunque, por los límites ya extensivos de este trabajo, no podremos ni profundizar mucho en las noticias que sobre ellos demos, ni hacer éstas todo lo amplias que se merecen.

##### A) *Su autoridad y consideración en las Cortes*

Se han venido efectuando, durante algún tiempo, afirmaciones verdaderamente inciertas. Era la primera que los Diputados americanos, pocos en número, estaban en un nivel intelectual muy por debajo de los peninsulares; era la segunda que siempre fueron mirados con desconsideración y hasta con menosprecio por estos últimos.

Es verdad que, de los 303 Diputados de aquellas Cortes, 63 nada más eran de Ultramar, y que suponía esto una gran desigualdad, mayor aún si se consideraba que la proporción que debían de tener con relación a los de la península era de tres a dos; es verdad también que, contra esta desigualdad,

apoyándose en la declaración de la Junta Central, que consideraba las antiguas colonias y factorías como provincias, con los mismos derechos y obligaciones que los peninsulares, en las disposiciones constitucionales que reflejan el mismo sentido, y, sobre todo, en la razón, contra esta desigualdad —repito— protestaron siempre los representantes del nuevo continente; y por último, es verdad que estas protestas no fueron atendidas con la atención que merecían, ni la arbitrariedad remediada, como en justicia se debía. Pero es falso que los Diputados americanos fueran menos cultos que los peninsulares. Basta recordar los nombres de Mejía Lequerica, de Curidi Alcocer, de Castillo y de tantos más, para que aquel que conozca un poco nada más las Cortes gaditanas aprecie lo que dista de la verdad esa afirmación.

Tan falsa como ella es la otra de que los Diputados de América fueran mirados con desconsideración o menosprecio por sus compañeros. Los datos siguientes nos lo demuestran: De los treinta y siete presidentes, trece fueron americanos; de los treinta y ocho secretarios, once fueron de ultramar; de los quince miembros de la comisión encargada del proyecto de Constitución, seis eran de América; de los nueve individuos de la diputación permanente, cuatro eran del nuevo continente. No cabe, pues, duda de que aquellos diputados gozaron de estimación y respeto, que se reflejan en los datos mencionados, donde vemos que ocupaban cargos y puestos de comisiones, en una proporción muy por encima de la que ellos estaban en la Cámara.

En cuanto a la autoridad de que gozaban, hay que decir que fueron acusados por elementos extraños, ya de las Américas, ya de la Península, de no representar bien a los territorios correspondientes, por ser muchos de ellos suplentes y elegidos entre los americanos que a la sazón estaban en este hemisferio; pero a estos ataques supo responder la Cámara en pleno, reconociéndoles públicamente todos sus derechos, como representantes de toda la Nación, y no poniendo ni una sola vez en duda la autoridad de aquellos congresistas.

B) *Orientación ideológica predominante  
en los Diputados americanos*

Otra acusación que se ha lanzado contra aquellos hijos de América, que representaron dignamente en las Cortes de Cádiz, es la de que fueron díscolos, y sólo se preocuparon de los asuntos que a ellos interesaban, por referirse a los territorios de la India. Llega a decir el profesor Zabala que «Don José Mejía, suplente por Santa Fe de Bogotá, y dotado de extraordinarias condiciones polémicas, auxiliaba con su palabra y su voto a los reformadores, en las resoluciones que podían convenir de algún modo a los intereses de América, y con habilidad portentosa sabía torcer el curso de los debates y de la discusión, más nacional y más española en el fondo, hacia una discusión americana que fuera preparando la proyectada independencia de aquella parte del Globo. Argüelles, jefe del partido español, vióse muchas veces burlado por la sagacidad de Mejía». Pero la afirmación, más grave, es la «de que aquellos patricios trabajaban aquí en obsequio a la guerra y separación de la revuelta América, incurriendo en la fea y repugnante nota de hipocresía y perseverante deslealtad».

Sale a la palestra, a rebatir tales afirmaciones, Rafael M. de Labra, que dice: «Para creer esto, es necesario no haber abierto las páginas del Diario de Sesiones de nuestra primera época constitucional. Porque allí consta de un modo detallado que, sobre todos los puntos fundamentales de la transformación política de España, se oyó la palabra de los Diputados americanos».

Es cierto que hay que reconocer que el problema americano interesó a ellos mucho y se ocuparon de él detenidamente, pero ello está muy lejos de que fuera el único objeto de su intervención.

Por otro lado, los Diputados americanos, con excepción de algunos cuyas ideas políticas eran completamente conservadoras, y del caso aislado de Páez y Martínez Robles, que era de la Comisión para el proyecto constitucional a la vez que partidario de la Inquisición, primero liberal y luego «persa», y consiguió terminar en la mitra de Puebla de los Ange-



les, a excepción de éstos, repito, la generalidad de aquéllos eran profundamente liberales, demócratas, influidos grandemente por las ideas de la Revolución Francesa, que acaso habían llegado a América con más facilidad que a la Península, y militantes en el partido reformista, cuyos triunfos ya hemos mencionado en diferentes ocasiones, por su sentido liberal, pluralista y democrático.

C) *Principales representantes de América  
en las Cortes de Cádiz*

Muy larga sería la lista si tratásemos de incluir en ella aunque no fuera nada más que el nombre de los Diputados americanos cuya intervención en los debates del Congreso fue muy interesante. De los sesenta y tres procuradores del Nuevo Mundo, tal vez no haya ni uno que por su actividad mereciera el silencio nuestro; pero como, por razones de brevedad hemos de limitarnos, sólo nos proponemos enumerar aquí los que tuvieron méritos excepcionales; mas, como nuestro criterio sobre ellos de seguro no será completo, por imperfecto, no está demás hacer antes la advertencia siguiente.

Vamos a empezar ocupándonos del gran coloso americano de las Cortes, de Mejía Lequerica, quien, junto con Muñoz Torrero y Argüelles, son los tres diputados de más prestigio del Magno Congreso. Mejía Lequerica nació en Quito y murió en Cádiz (1776-1813), fue llamado el Mirabeau americano por su arrebatadora elocuencia, estudió Filosofía en el Colegio de San Fernando, obtuvo el título de maestro en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, luego se licenció y doctoró en Medicina y Teología, ganó en oposición la Cátedra de Gramática, vino a España a estudiar las antigüedades y la civilización del viejo continente, y en ocasión de su llegada se encontró con que nuestra patria estaba invadida por los franceses, tomó parte activa en la guerra de la independencia exponiendo en ella su vida, fue nombrado Diputado suplente por el Virreinato de Nueva Granada en las Cortes de Cádiz,

en ella fue el eterno «rival» de Argüelles en los muchos debates en que intervino, hizo galas de su espíritu de jurista a la vez que de su extensísima cultura, gran patriota, estaba profundamente encariñado con su tierra natal cuyos intereses defendió siempre, en cuanto a su ideología militó siempre en el partido liberal, cuya bandera defendió siempre, en colaboración con Bartolomé J. Gallardo, redactaba la «Abeja», intervino en los debates de la abolición de la esclavitud, de la inquisición, de los señoríos, de las mitas, del voto a Santiago, en el de la instauración de la libertad de imprenta, en muchos sobre la Constitución, y en todos ellos mantuvo una extrema y nítida posición democrática y un genuino liberalismo.

Otro americano célebre de aquellas Cortes fue D. Antonio Larrazábal y Arrivillaga, nacido en Guatemala, de donde fue canónigo y diputado, formó parte en las Cortes de varias comisiones, pronunció veintiséis discursos con ocasión del proyecto de la Constitución e intervino en otros muchos debates; sus intervenciones se caracterizaban por ocuparse de los altos principios de la política, desentendiéndose de la menuda, en lo que se asemejaba a Torreros; defendió la libertad de los esclavos negros, y reclamó escuelas para los indios; de él dice Brum que fue «quien propuso a las Cortes el patronato de Santa Teresa, medida que sin duda hubiera podido salvar a España y hacer feliz a los españoles, y era el único que, sin afiliarse a ningún partido político, nunca se acaloró en las discusiones y fue siempre el más apto para disipar la tempestad»; por su espíritu de rectitud se acarreó «el odio de D. Fernando y de sus sayones, y fue encerrado, juzgado y sentenciado a reclusión en un convento a aprender religión —¡qué ataque a la religión misma!— y fidelidad al monarca».

D. Vicente Morales Duero, natural de Lima, abogado y profesor universitario, representaba en las Cortes la posición media entre las derechas y las izquierdas americanas. Fue presidente, si bien en realidad no desempeñó el cargo más que un solo día, ya que enfermó al otro de tomar posesión y murió poco tiempo después; intervino en muchos debates, como en las proposiciones de la abolición de estancos, liber-

tad de tráfico, reparto de empleos públicos entre peninsulares y criollos, y sostuvo, en contra de Mejía, la pretensión de restituir los jesuitas a América; habló en pro de la libertad de imprenta, y, en fin, en todos sus discursos se manifiesta como el hombre que está siempre exento y libre de arrebatos extremistas.

Hablaremos en último lugar de D. José Miguel Curidi Alcocer, quien nació en San Felipe de Isctacuigtla, en 1763; se licenció y doctoró en Teología y Cánones, y se matriculó como letrado en el Real Colegio de Cánones; Diputado por Tlascalala, fue conocido en las Cortes por el cura de Tacubaya; exceptuado Mejía, fue el Diputado más radical de aquella Asamblea; hizo la más varonil defensa de la abolición de la esclavitud; su credo político fue el de las ideas liberales y republicanas. De los discursos más célebres que pronunció, fue muy conocido el que criticaba la desigualdad de peninsulares y americanos ante las elecciones, y en él, viendo con claridad el problema de América, decía: «Es preciso demostrar con obras que los principios de equidad y justicia, que V. M. adopta, no se limitan precisamente a la península, sino que también debe transmitirse por encima de las aguas hasta aquel hemisferio. Esto, señor, es indispensable para mantener las Américas»; por último, nos ha dejado escritas muchas obras, donde manifiesta la visión precisa que tenía de su tiempo.

No debemos terminar sin antes nombrar, aunque sólo sea de paso, a D. José Miguel Cordoa, a D. Antonio Joaquín Pérez, a D. Juan José Gureña, y, sobre todo, a D. Florencio del Castillo, del que ya tuvimos ocasión de hablar, y cuyo nombre, como dijo muy bien De Labra, «va íntimamente unido a la gran causa de la libertad de los indios».

#### VII.—*Relación de la labor de las Cortes de Cádiz con la independencia de América*

Durante mucho tiempo se ha dicho que fueron los Diputados de las Cortes de Cádiz los que, con su actitud, provocaron el movimiento separatista de los territorios del nuevo

continente; movimiento que, a la postre, había de terminar con la independencia de las antiguas colonias americanas.

Es realidad que ellos, en parte, asumieron tal responsabilidad histórica, pero ¿fue por los principios de libertad que decretaron, como afirmaban los elementos derechistas del siglo pasado, o por no haber sido todo lo liberales que debieron?

Nuestro hispanoamericanista De Labra tiene publicada la recopilación de una serie de artículos periodísticos, que vieron la luz antes de la pérdida de las Antillas. En estos artículos, aconsejaba al Gobierno, que a la sazón había, el camino a seguir para conservar los restos de nuestro gran Imperio colonial, pero el cubano, a pesar del conocimiento de la realidad de las cosas y circunstancias que demostraba, y de lo razonado de su trabajo, no fue escuchado, y las Antillas se perdieron.

En este contexto, De Labra se sostiene, con razón, que la libertad no perdió las Américas. Por el contrario, las causas de esa pérdida fueron otras muchas: con arreglo al aludido trabajo y a otras obras, me voy a ocupar de esas causas.

En primer lugar, ya la Regencia, al convocar a los Diputados americanos en proporción menor a los peninsulares, y después de haber equiparado aquellos territorios en derechos y deberes con los de la Metrópoli, cometía una injusticia que, naturalmente, había de excitar los ánimos de los ultraoceánicos, que tan patrióticamente habían contestado poco tiempo antes al llamamiento de la Regencia, y entre los cuales, como en todas las colonias del mundo, había una estricta minoría partidaria de la independencia. Causó peor impresión todavía el otro acuerdo de los regentes, tan contraproducente como poco franco. Habían concedido a los territorios ultraoceánicos la misma facultad de comerciar con los extranjeros que a los españoles, pero «los comerciantes de Cádiz asediaron a los directores, y con el nombre de intereses creados y del sagrado de Patria —señala Julio Somoza— les obligaron, no sólo a anular el decreto, sino a suponer que había sido una falsificación»; esta actitud, que ahora aún nos repugna, tuvo fatales consecuencias.

Reunidas las Cortes, una y otra vez, repitieron palabras de promesas; «desde este momento, españoles americanos, os elevais a la dignidad de hombres libres», les decían, pero, mientras tanto, no se atrevían a equiparar por completo en derechos a los peninsulares con los del otro continente, y así decretan aquel desgraciado artículo 22 de la Constitución. «Tan bellas promesas, pero estériles —dice Gervinus—, y todas aquellas reformas aparentes irritaron tanto más a los americanos».

Otro error de aquellas Cortes, que redundó en beneficio del espíritu separatista, fue su legislación en materia administrativa. Ya vimos cómo, aun en el proporcionalmente limitado suelo de nuestra Península, aquél fracasó plenamente; si esto pasaba aquí, había de pasar más profundamente en los otros territorios americanos, donde, por las circunstancias geográficas, antropológicas..., murió después Bolívar, soñador de «la santa alianza americana de los pueblos», diciendo: «¡Unión, Unión!», sin conseguir su empeño.

Si, en lugar de este espíritu unificador, hubieran aceptado y aprobado aquellas Cortes el proyecto de autonomía colonial presentado por los Diputados de ultramar, seguramente se habría evitado la pérdida de las Américas; pero el problema colonial sólo ha sabido enfocarlo así Inglaterra, a partir del Reinado de Victoria I.

Por último, la causa que influyó más profundamente en aquella independencia fue la equivocación de los legisladores al considerar la cuestión colonial como una cuestión de fuerza, cuando lo era de comprensión y justicia.

Aquellos legisladores, que habían abogado por sobreponer la razón a la arbitrariedad, no supieron extender aquélla a todos los territorios de la España; en América se seguía tiranizando, de tal forma que, afirma Costa Calí, peninsular y fiscal de la Audiencia de Caracas, en «el país de los cafres no podían ser los hombres tratados con más desprecio y vilipendio». Aquellos Diputados, cuya actitud significa la más enérgica protesta contra el régimen absolutista, no dudan en nombrar gobernadores de los territorios de ultramar a espíritus formados bajo el régimen caído, y encomiendan «la di-

rección de los negocios públicos al elemento militar. Faltos sus hombres de verdadera educación política, criados bajo el régimen de la disciplina, y desconocedores absolutamente de la complejidad de la vida civil, necesitan, para que su empeño se logre, la completa pasividad de los pueblos, y, cuando éstos se conmueven y agitan, no saben encontrar el medio entre la acometida y la retirada», y las Indias españolas estuvieron gobernadas durante aquellos tiempos sólo por brigadieres y generales.

Así pues, de lo dicho se deduce que los Diputados doceañistas no llegaron a comprender que el problema de América no tenía más solución que la formación de un gran Imperio colonial —solución que ya en tiempos anteriores la había previsto un gran estadista español, que propuso hacer de aquellos territorios reinos independientes, entronando en ellos príncipes de la dinastía española, y siempre bajo el control del Monarca de origen—, a la forma del moderno inglés, con autonomía máxima para las colonias, o, si lo comprendieron, les faltó valor para hacerlo.

De lo que antecede se desprende la consideración de que la intransigencia de las Cortes de Cádiz influyó en la pérdida de aquellos territorios, y el entendimiento de que, en todo caso, la libertad no perdió las Américas.

#### VIII.—*Resultado de las Cortes de Cádiz*

Difícil empeño sería el mío si solamente me propusiera enumerar los resultados de aquellas Cortes; ya dije antes que han sido consideradas por insignes tratadistas como el punto de partida de nuestra Historia Constitucional y como la bandera del liberalismo en el primer tercio del siglo XIX. Con ese resultado nada más, bien puede gloriarse un Congreso. Con razón se ha llamado por Zabala a aquellas Cortes «templo del alma nacional, que allí reinó, limpia, entera y santa».

Para salvar esta dificultad, yo voy a prescindir —por obvios— de hacer mención de todos los resultados positivos de aquellas Cortes, y me voy a ocupar de su resultado negativo,

es decir, de lo que ellas se propusieron conseguir y no lo consiguieron, de lo que quisieron lograr poniendo todos los medios que tenían a su alcance para ello y a su pesar no lo lograron.

Quisieron nuestras Cortes de Cádiz unificar la vida administrativa en todos los territorios de la península según un régimen-patrón francés, y no lo consiguieron, fundamentalmente porque se encontraron frente a una realidad tradicional, que tenazmente se oponía a ello.

Quisieron nuestras Cortes luchar contra la influencia de la Iglesia en la vida política de España, y se encontraron con la oposición de un pueblo inculto, agitado por un clero fanático, famoso por guerrillero, que en algunos sitios hizo gritar a la plebe: «¡viva la Inquisición!», cuando se había acordado abolir ésta.

Quisieron tratar en un plano de igualdad a todos los individuos que vivieran en territorios españoles, y se encontraron con perjuicios tradicionales que les impedían llamar hermanos a los de origen africano.

Quisieron nuestras Cortes concordar la soberanía nacional con la persistencia de la realeza en la persona de Fernando VII, y se encontraron con que éste era el Rey más absolutista y falso que hasta entonces registrara la Historia.

Quisieron hacer una Constitución que sometiera el Rey al pueblo, y se encontraron con un Rey perjuro y un pueblo que, cuando le hablaban de Constitución, preguntaba: ¿y qué es eso?

Las causas de todos estos fracasos acaso puedan concretarse principalmente en las formulaciones siguientes:

- 1.º) No haberse preocupado de averiguar lo que en nuestra tierra era innato y perenne, para haber afrontado todas las reformas en base a ello, y sí haberse dejado llevar demasiado por la influencia extranjera, que aconsejaba reformas de poco arraigo en nuestro suelo.
- 2.º) Haber querido dar un paso tan largo en Política que,



según dice Somoza, revela un criterio revolucionario, en contra de la evolución, sustentada por Jovellanos, más adaptable a las circunstancias de la sociedad a que la nueva legislación liberal se destinaba.

- 3.ª) Haber querido imponer un régimen de República coronada, olvidando la tradición de la dinastía Borbón, y además, como dijo Pi y Margall más tarde, que en la República toda reforma tiene que nacer de abajo, no imponerse de arriba.
- 4.ª) Haber olvidado por completo, como dice Zabala, que «España no se hallaba preparada para un cambio tan brusco», pues, como ha señalado Teodoro González, estábamos «necesitados de una sólida preparación ideológica, como base serena y permanente, de donde tomar fuerte apoyo para constituir honestamente una adecuada estructuración jurídica y política».

Estos y otros concomitantes factores causales pueden, en síntesis, resumirse en uno: haber querido hacerlo todo con arreglo a las teorías de las doctrinas, olvidando en considerable medida las realidades de las circunstancias.

## BIBLIOGRAFIA

- Fernando de los Ríos*: «El sentido humanista del socialismo».  
«La Religión y el Estado en la España del siglo XVI».
- A. Malet*: «Historia Universal».
- Pío Zabala*: «Evolución del régimen constitucional en España».  
«España bajo los Borbones».
- Juan José Panero*: «Napoleón y el Paneuropeísmo».
- Pedro Aguado Bleye*: «Elementos de la Historia de España».  
«Manual de Historia de España».
- Salvador Menguijón*: «Historia del Derecho español».
- Rafael M. de Labra*: «La Constitución de Cádiz de 1812».  
«Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz».  
«América y la Constitución española de 1812».  
«Los presidentes americanos en las Cortes de Cádiz».  
«La pérdida de las Américas».
- M. Calvo Marco*: «El régimen parlamentario de España».
- E. del Valle Iberlucea*: «Las Cortes de Cádiz».
- Lea*: «Historia de la Inquisición».
- Wenceslao Roces*: «Notas del Traductor» de D. Georg: «Derecho político y constitucional».
- Brum*: «Retratos políticos de la revolución española».
- Julio Somoza*: «Cartas entre Jovellanos y Lord Wassall».
- Teodoro González*: «Prólogo del Traductor» de R. G. Gettell: «Historia de las ideas políticas»